

Memorias / Banco de España.

Año 1946 (Ed. 1947)

Madrid : Banco de España, 1856-1960.

Signatura: 3/5A/4/1

La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

<http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html>

Aviso legal

Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de lucro siempre y cuando se cite la fuente

MEMORIA
DEL
BANCO DE ESPAÑA
1946

BANCODE ESPAÑA
Eurosisistema

BIBLIOTECA



1 100009 045862

3/5A/4/1

MEMORIA

MEMORIA

MEMORIA

LEIDA EN LA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DEL

BANCO DE ESPAÑA

LOS DIAS 2 Y 9 DE MARZO DE 1947



MADRID

GRÁFICAS REUNIDAS, S. A.

HERMOSILLA, NUM. 106

1947

MEMORIA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

BANCO DE ESPAÑA

ANEXO A LA LEY

1901

SUMARIO

PRIMERA PARTE

- I. Billetes.
- II. Obras.
- III. Personal.
- IV. Acciones.
- V. Consejo.

SEGUNDA PARTE

EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 1946 EN EL ORDEN MONETARIO

- A) El mercado monetario.
- B) Causas del auge del dinero.
- C) Los efectos sobre los precios.
- D) Efectos en la Bolsa.
- E) Operaciones del Banco de España.

PRIMERA PARTE

SEÑORES ACCIONISTAS:

Por sexta vez me cabe el honor de autorizar con mi firma la Memoria que en cumplimiento de disposiciones estatutarias se presenta a la Junta general de Accionistas del Banco de España, para su atento examen y posterior aprobación.

Ha sido convocada, y se reúne esta Junta general, cuando ha entrado ya en vigor una nueva e importante Ley de Ordenación Bancaria, que estatuye en sus numerosos preceptos reformas que afectan a todo el organismo del crédito en nuestra Patria, y cuya sección primera, que abarca 32 artículos, se refiere exclusivamente al Instituto emisor.

Con la promulgación de esta Ley se cierra un importante período en la historia del Banco de España: el regido por la Ley de 29 de diciembre de 1921, y por la legislación (Leyes de 9 de noviembre de 1939 y 13 de marzo de 1942), que hubo de redactarse bajo el peso acuciador de situaciones de urgencia.

La reciente Ley de Ordenación Bancaria abre una

nueva etapa en la historia ya secular de esta Institución. Nueva etapa en la que, sin solución de continuidad, el Banco de España ve mantenida y salvaguardada su personalidad jurídica; y si se acentúa la intervención del Estado en su régimen interno, esto se realiza sin copiar recientes tendencias extranjeras de excesiva originalidad y de más que dudosa eficacia.

Siguiendo este criterio, el respeto y consideración al capital privado fué subrayado, incluso como exigencia de una sana política, al recordarse ante las Cortes por el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda que «no sería obra de buen gobierno la que no se asentara en el depósito de confianza, prestigio, experiencia y organización que..... (el Banco) ha ido acumulando a través de su historia».

Más aún: Se ha considerado que el hecho de que el capital del Banco permanezca en manos de sus Accionistas constituye un factor que hubiera sido temerario alterar, porque su persistencia como tal, aparte de ser expresión elocuente de la continuidad de la Institución, y signo y sostén de su autonomía, constituye una eficaz y positiva garantía de conducta y estímulo para una celosa administración.

No es éste el momento ni el lugar más oportuno para un minucioso examen de la Ley. Por otra parte, su innovación fundamental es producto de la evolución seguida por la legislación bancaria española. Pero

sobre todo es ya la Ley por la que nos regimos, y su comentario más adecuado es el de su eficaz y leal cumplimiento en todos sus extremos. Habréis de permitirme, tan sólo, la expresión de la segura confianza en que, bajo el imperio del nuevo ordenamiento jurídico, el Banco de España continuará en el progresivo desempeño de sus funciones como ejecutor del monopolio de emisión, con plena salvaguardia de su personalidad jurídica, y como fiel servidor de las normas generales que en materia de política del crédito dicte el Gobierno.

Como consecuencia de la nueva ordenación del Gobierno del Banco de España, desaparecen los puestos de Adjuntos al Gobernador, creados por la Ley de 13 de marzo de 1942, y cesan en sus cargos quienes como tales los ocupaban. De D. Francisco de Cárdenas y de la Torre, Adjunto primero en estos años, sólo he de decir que sus dotes de afabilidad y discreción en el trato social, junto con una cultivada inteligencia y un preciso sentido jurídico, hacían de su colaboración al Banco un don inestimable. Hemos de congratularnos, pues, de que ésta no cese, sino que como Consejero representante de los intereses generales de la economía nacional, continúe, para beneficio de esta Casa, su labor en la misma.

Para el cargo de Subgobernador del Banco de España ha sido designado por el Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, D. Luis Sáez de Ibarra y Sáez de Urabain, Director general de Banca y Bolsa y Adjunto segundo al Gobernador del Banco. Funcionario destacado de uno de los más prestigiosos Cuerpos de la Administración Pública, dotado con cualidades relevantes, de sus dotes de laboriosidad, competencia y energía, contrastadas en los altos cargos públicos por él desempeñados, mucho cabe esperar y en ello confía el Banco de España.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 4.º y 5.º de la Ley de 31 de diciembre de 1946, han debido cesar en sus cargos de Subgobernadores los señores don Ramón Artigas Gracia y D. César A. de Arruche y Villanueva. Su sincera y total adhesión al Banco de España, y el celoso servicio a la Institución que en sus dilatados años como funcionarios del Banco pusieron bien de manifiesto, les hace merecedores de una cordial expresión de afecto y simpatía, que en vuestro nombre me permito reiterarles.

I

B I L L E T E S

Como encargado, en régimen de monopolio, del privilegio de emisión fiduciaria, el Banco dedica su más constante y celosa atención a las vicisitudes todas de la emisión, y a los problemas técnicos que la impresión de nuevas series origina.

Con fecha 19 de febrero de 1946 se aprobó una nueva emisión, a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con lo que se ha dado un importante paso en la nacionalización de la fabricación de billetes del Banco, a pesar de las dificultades que el incremento de trabajo origina a dicha Entidad fabril.

Fué puesta en circulación durante el año una nueva serie de billetes de una peseta, emisión de 15 de junio de 1945, así como alguna otra serie de los billetes fabricados en Italia que se tenían en reserva.

El incremento de la circulación fiduciaria de los billetes de las series de cinco, dos y una pesetas, con su mayor desgaste en relación con los de las series grandes, ha motivado la intensificación del trabajo en los hornos de quema, en los que, durante el pasado año, de casi ciento treinta y cuatro millones de billetes

destruidos, más de ciento diez y siete millones pertenecían a las series de una, dos, cinco y diez pesetas.

II

O B R A S

Ha continuado en el pasado año la política de obras y construcciones de nuevos edificios en distintas Sucursales, y la cantidad invertida en compra de nuevos solares y en obras durante el año 1946, asciende a pesetas 19.490.897,63. Ha sido adquirido un nuevo solar para la instalación de una Agencia urbana en la plaza de Barcelona, y se encuentra en estudio el proyecto del edificio que allí habrá de levantarse; compra muy ventajosa, pues sitúa al Banco de España en el centro de la ciudad condal con fachada a la Plaza de Cataluña. Se terminaron las obras de reforma del edificio de la Sucursal de Cádiz; se encuentran en plena construcción, ya muy avanzados, los edificios de las Sucursales de Don Benito, Valdepeñas, Gijón y Santiago. Se ha iniciado la construcción de los de Jaén y Tánger e importantes reformas en los de Antequera y Lérida, y han sido adjudicadas a distintos contratistas las obras de las Sucursales del Ferrol del Caudillo, Pontevedra, Talavera y Larache. Además, han sido

sacados a concurso los proyectos de construcción de las nuevas Sucursales de León, Tetuán y Linares, y se encuentran en preparación los proyectos para Toledo y Las Palmas y el de la Agencia urbana de Barcelona que antes se ha citado.

III

P E R S O N A L

Durante el pasado año se produjo la jubilación del Cajero de Metálico D. Juan Villarroya Masfarnier, sustituido por D. Fermín Eustaquio Lázaró Giner, Oficial Subcajero, quien falleció en junio de aquel año, con pérdida para el Banco de un excelente funcionario.

Es de justicia consignar la satisfacción del Gobernador y del Consejo del Banco de España, por el comportamiento, en general, del personal de todas las escalas del Banco, quien ha continuado durante el pasado ejercicio disfrutando de igual régimen de retribuciones ordinarias y extraordinarias que en años anteriores.

Se acordó, con la autorización concedida en la pasada Junta general ordinaria, continuar asimismo la distribución entre los empleados jubilados y los familiares de los fallecidos, de la cantidad asignada entonces a este fin.

IV

ACCIONES

Por considerarlo de interés para los señores accionistas, y como es ya costumbre tradicional de la Memoria del Banco, se exponen a continuación las modificaciones que en el número de accionistas de nuestra Entidad se han producido durante el pasado ejercicio, aun cuando las mismas no hayan sido muy numerosas.

En 31 de diciembre de 1946, las acciones del Banco se hallaban distribuídas del modo siguiente:

Domiciliadas en Madrid, 143.145 acciones a favor de 5.508 accionistas.

Domiciliadas en Sucursales, 210.855 acciones a favor de 12.482 accionistas.

Total, 354.000 acciones a favor de 17.990 accionistas.

En comparación con 1945, ha aumentado en 137 el número de señores accionistas, de ellos 12 fundaciones de carácter benéfico, ya que los accionistas de este carácter del Banco de España eran, en 1945, 780, y han pasado a ser, en 1946, 792, con 48.473 acciones.

Como veréis, continúan las acciones del Banco de España gozando de una destacada confianza por parte del ahorro español pequeño y medio.

V

CONSEJO

El pasado mes de marzo falleció el Vocal del Consejo del Banco de España Excmo. Sr. D. José Varela de Limia, Vizconde de San Alberto.

Persona dotada de las más excelsas dotes de caballerosidad, de merecido y extenso prestigio, especialmente en Galicia, región a la que dedicó todos sus afanes, la pérdida de su colaboración, tan acertada como celosa, constituye para el Banco y sus compañeros del Consejo un motivo de hondo pesar.

Para ocupar su puesto en el Consejo fué designado D. Fernando Suárez de Tangil y de Angulo, Conde de Vallellano, cuya destacada personalidad en diversas órbitas de la vida española es ocioso subrayar.

Atendiendo a los preceptos estatutarios, corresponde cesar en el presente ejercicio a los Consejeros siguientes: D. Luis de Urquijo y Ussía, Marqués de Amurrio; D. Juan Antonio Gamazo y Abarca, Conde de Gamazo, y D. Francisco Aritio Gómez. Sobre este punto los Consejeros representantes de los accionistas, en unión de los accionistas asociados, someterán a la Junta la propuesta correspondiente. Esta habrá de ajustarse a lo establecido en la primera disposición transitoria de la vigente Ley de Ordenación Bancaria.

Como representantes de los intereses generales de la Economía Nacional, junto con D. Francisco de Cárdenas y de la Torre, han sido nombrados D. José María Zumalacarregui y Prat y D. Luis Sancho Seral, Catedráticos universitarios ambos y personalidades de relevante prestigio científico y profesional. Completa esa representación quien ya ostentaba anteriormente dicho cargo en el Consejo, D. Luis Olariaga Pujana. Como representante de las Cajas de Ahorro ha sido designado para el Consejo del Banco de España don Buenaventura José Castro Rial, Director general de Previsión.

El Consejo ha de registrar también en este lugar, con verdadero sentimiento, la cesación en sus funciones de D. Angel Gutiérrez Martínez, quien ha venido desempeñando, desde los comienzos de nuestra Guerra de Liberación, uno de los puestos de Consejero representante del Estado en el Banco, habiendo consagrado al ejercicio de ese cargo sus altas dotes de inteligencia, y dado en él relevantes muestras de celo y eficacia.

LOS DIRECTORES GENERALES

Según lo establecido en el artículo 5.º de la Ley de Ordenación Bancaria, el Consejo del Banco elevó al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda las oportunas propuestas en terna para la designación de estos altos

cargos. El Gobierno ha nombrado a D. Vicente Barba Farrugia, Director Jefe de Sucursales, y a D. Federico Carracedo Burgaz, Jefe de Operaciones del Banco, para dichos puestos.

La competencia, laboriosidad y eficacia puestas de relieve por ambos funcionarios en casi cincuenta años de servicios al Banco de España, son la mejor señal del acierto en su nombramiento y de la confianza que en su futura gestión puede depositarse.

SEGUNDA PARTE

SEGUNDA PARTE

EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1946 EN EL ORDEN MONETARIO

Durante el pasado año de 1946, el conjunto de la Economía Española, y en especial el mercado monetario, se ha visto dominado por fases de muy distinta significación. Hasta principios de junio existió una abundancia de disponibilidades, manifestada en síntomas tan concretos como el reflujo de los billetes a las Cajas del Banco de España y el descenso de la circulación fiduciaria, que hasta el 10 de junio fué inferior a la cifra publicada en el balance de 31 de diciembre de 1945.

Las cuentas corrientes acreedoras en el Banco de España aumentaron con tendencia invariable durante los primeros meses del año en más de ochocientos millones de pesetas, y llegaron a alcanzar su cifra máxima a fines del mes de mayo. Igualmente el Tesoro público pudo reducir su débito al Banco, presentando también su cuenta en el Establecimiento un saldo acreedor por dicha fecha.

Esta abundancia de disponibilidades y fluidez del

mercado del dinero empezó a reducirse a mediados del año, y en el segundo semestre, a pesar del continuo acrecer de las cuentas acreedoras en la Banca privada y de la estabilidad de las del propio Banco de España, hubo necesidad de una fuerte expansión del dinero y del crédito, acentuada de modo ostensible en los últimos meses del año, por virtud de especiales necesidades registradas en la esfera del crédito privado.

Han sido singularmente las necesidades estacionales de la producción agrícola española, el desarrollo de la producción industrial, las ampliaciones de capital de muy distintas sociedades y el atesoramiento, las que han exigido en el último trimestre, junto con las necesidades del Tesoro, agudizadas al final del año, una fuerte expansión del crédito con sus consecuencias obligadas en la circulación de billetes y en la cartera comercial del Banco de España.

Tales han sido los síntomas más acusados del pasado ejercicio económico, cuyo preciso desarrollo conviene estudiar algo más detenidamente, en especial sus efectos sobre precios y cotizaciones.

A) EL MERCADO MONETARIO

La circulación de billetes del Banco de España ha experimentado en 1946 un importante aumento sobre la cifra final del año 1945. En 31 de diciembre de 1946, el saldo de la cuenta de billetes en circulación era de 22.777.257.460 pesetas, con un aumento sobre el saldo de idéntica fecha del año anterior de pesetas 3.816.728.162, lo que representa un incremento del 20,1 por 100 sobre dicho año.

El auge de la circulación fiduciaria durante el año 1946 ha sido ciertamente superior al de los años anteriores, y el ritmo de ese crecimiento acusa tendencias de aceleración en el proceso de creación del dinero; pero responde a causas tan distintas de las de años anteriores, que su descripción debe hacerse con todo cuidado y detenimiento.

Durante los cinco primeros meses del año, el volumen de la circulación fiduciaria ha sido inferior al máximo registrado en 1945, y la pequeña expansión de crédito que significaron los incrementos de la cartera activa del Banco pudo ser realizada sin aumento en la circulación de billetes. La fluidez del mercado se manifestó notoriamente en la abundancia de disponibilidades que acusaban los saldos en continuo crecimiento de las cuentas corrientes acreedoras, tanto del Banco de España como de la Banca privada.

Sólo en el mes de enero de 1946, la circulación llegó a reducirse en más de 524 millones de pesetas, con lo que el dinero creado para hacer frente a los pagos extraordinarios del Tesoro al final del ejercicio 1945 retornó bien pronto al Banco emisor, y la cifra máxima de circulación de billetes de todos los años viene a coincidir con la registrada en el balance de 31 de diciembre, tiene una significación menos importante de lo que podría suponerse.

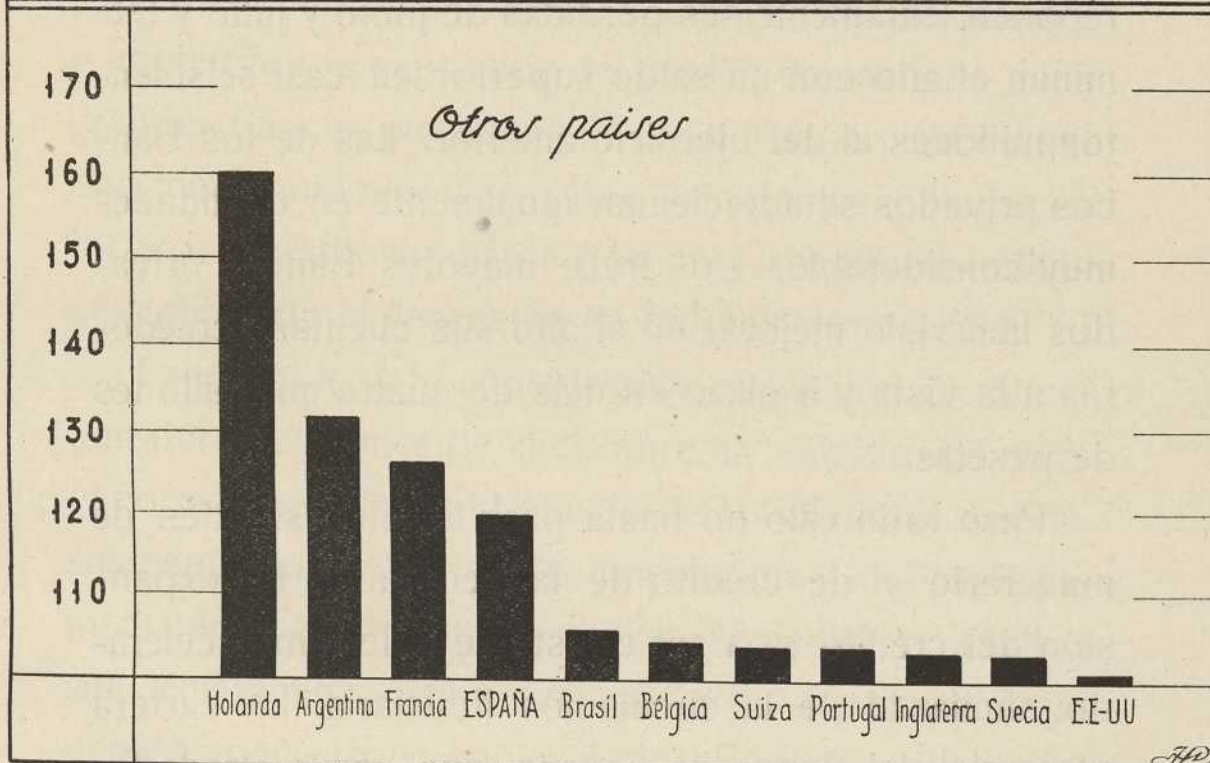
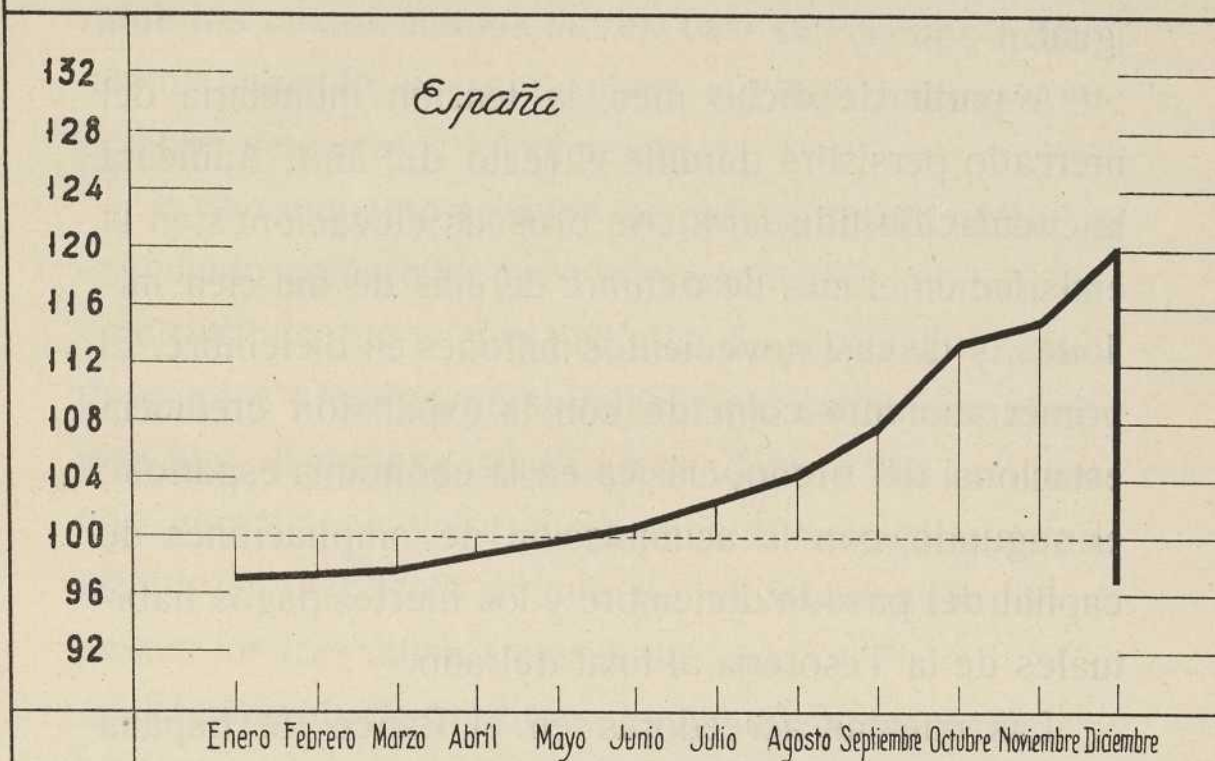
Las cuentas corrientes del Banco se incrementaron en mayor medida que la suma en que disminuyó la circulación fiduciaria; así, durante el primer semestre, su aumento fué de casi 1.000 millones de pesetas, alcanzando a fines de mayo la cifra más elevada del ejercicio, con un saldo de pesetas 4.284.204.877. Igualmente, en ese período la cartera comercial del Banco, tanto en su cifra de descuento de efectos como la de los créditos en forma de pólizas, se mantuvo con una estabilidad muy marcada, buena prueba de que el mercado monetario no necesitaba nuevas disponibilidades, sino que las que en él existían bastaban para la financiación de todas las necesidades de la economía.

Pero ya en el mes de junio cambia el panorama monetario; las reservas de los Bancos privados en el de España se reducen en dicho mes en casi 500 millones de pesetas, y las cuentas corrientes de par-

Incremento de la circulación fiduciaria durante 1946

En números índices

Diciembre de 1945=100



Los diagramas de Inglaterra y Estados Unidos no son significativos, ya que en estos países el medio circulante se compone en su mayor parte de dinero bancario — cheques — y no de billetes del Banco emisor.

ticulares y entidades oficiales, en otra cantidad casi igual.

A partir de dicho mes, la tensión monetaria del mercado persistirá durante el resto del año. Aumenta la circulación fiduciaria con bruscas elevaciones en la emisión: en el mes de octubre de más de mil cien millones, y de casi novecientos millones en diciembre. El primer aumento coincide con la expansión crediticia estacional del otoño, clásica en la economía española; el segundo, con la acumulación de ampliaciones de capital del pasado diciembre y los fuertes pagos habituales de la Tesorería al final del año.

Las cuentas acreedoras en el Banco de España reponen lentamente sus pérdidas de junio y julio y terminan el año con un saldo superior en casi seiscientos millones al del ejercicio anterior. Las de los Bancos privados se acrecientan igualmente en cantidades muy considerables. Los trece mayores Bancos privados han visto mejorar en el año sus cuentas acreedoras a la vista y a plazo en más de cuatro mil millones de pesetas.

Pero todo esto no basta para las necesidades de numerario y de crédito de la economía. La expansión del crédito va a ser constante y de ritmo acelerado, similar al de la circulación fiduciaria. La cartera comercial del Banco de España, que oscila alrededor de los cuatro mil millones durante el primer semestre

del año, aumenta casi dos mil quinientos millones durante los cuatro últimos meses; casi setecientos millones de aumento en septiembre; mil cien millones en octubre; setecientos en diciembre.

Y este aumento se debe en casi su totalidad, no al descuento comercial, cuyo incremento es mínimo en este período (unos cien millones de pesetas), ni tampoco a los créditos personales, cuyo saldo dispuesto más bien disminuye, sino que se debe a los créditos con garantía de valores, que por sí solos logran un alza de su dispuesto de más de mil setecientos millones en los tres últimos meses del año.

El aumento de crédito se repite de modo similar en los Bancos privados. Sólo en los dos meses de octubre y noviembre la expansión del crédito demandada a los grandes Bancos por su clientela excede la cifra de mil doscientos millones de pesetas: setecientos millones en forma de crédito mediante pólizas y quinientos millones utilizando el descuento de efectos comerciales.

Esto, unido a la considerable expansión crediticia que durante el mes de diciembre ha exigido del mercado las apelaciones al ahorro de las distintas empresas españolas en forma de ampliaciones de capital o mediante constitución de nuevas sociedades, explica suficientemente que a este proceso expansivo haya debido concurrir en apoyo de los Bancos privados el propio Banco de España.

En síntesis, el año 1946 termina con un incremento monetario que en la esfera del Banco de España es del orden de tres mil ochocientos millones, representados por el aumento de la circulación, y el de casi seiscientos millones en sus cuentas acreedoras.

A esto corresponden en el Activo la mejora en casi dos mil trescientos millones de la cartera comercial del Banco y el incremento del débito de la cuenta corriente plata del Tesoro público.

B) CAUSAS DEL AUGE DEL DINERO

Este fuerte incremento de los medios de pago reales y potenciales, o sea billetes del Banco de España y saldos de las cuentas corrientes acreedoras, responde a la acción combinada de muy diversas causas, a saber:

En primer lugar, necesidades reales de la economía agraria española, que actúan con un ritmo estacional muy marcado. La movilización de las cosechas de cereales, tan superiores en este año a las de 1945; la de la remolacha azucarera y la del vino, y sobre todo la excepcional del aceite, han originado unas necesidades de crédito muy amplias, tanto por el mayor volumen de producción como por el mayor precio de los productos, y porque éstos deben permanecer estanca-

dos algún tiempo en depósitos y almacenes hasta llegar al consumidor, ha sido necesario movilizar una gran masa de crédito y ésta permanece viva y operante durante varios meses.

En segundo lugar, el incremento de medios de pago es una consecuencia del alza de los precios. Aun con un volumen de producción constante, el precio elevado exige mayor empleo de numerario y las empresas han de afrontarlo, o con más caja, lo que implica mayor salida de billetes del Banco emisor, o con un aumento de sus saldos en cuenta corriente, o con más crédito; esto es: exigiendo mayor ayuda de los Bancos y provocando así nuevas emisiones del Banco de España.

En tercer lugar, el aumento de productos. La economía española ha acusado mejores producciones en 1946, no sólo en el sector agrícola, sino también, aunque en menor escala, en el industrial. El índice medio ponderado de la producción industrial española elaborado por el Servicio de Estudios del Banco registra, sobre la base ciento asignada al año 1940, la serie siguiente en los años sucesivos:

1940	100
1941	113,8
1942	126,8
1943	111,1
1944	128,5
1945	115,6
1946	133,2

Este incremento de producción ha reclamado un mayor volumen de crédito, que, junto con las exigencias anteriormente señaladas, explica las características del pasado ejercicio.

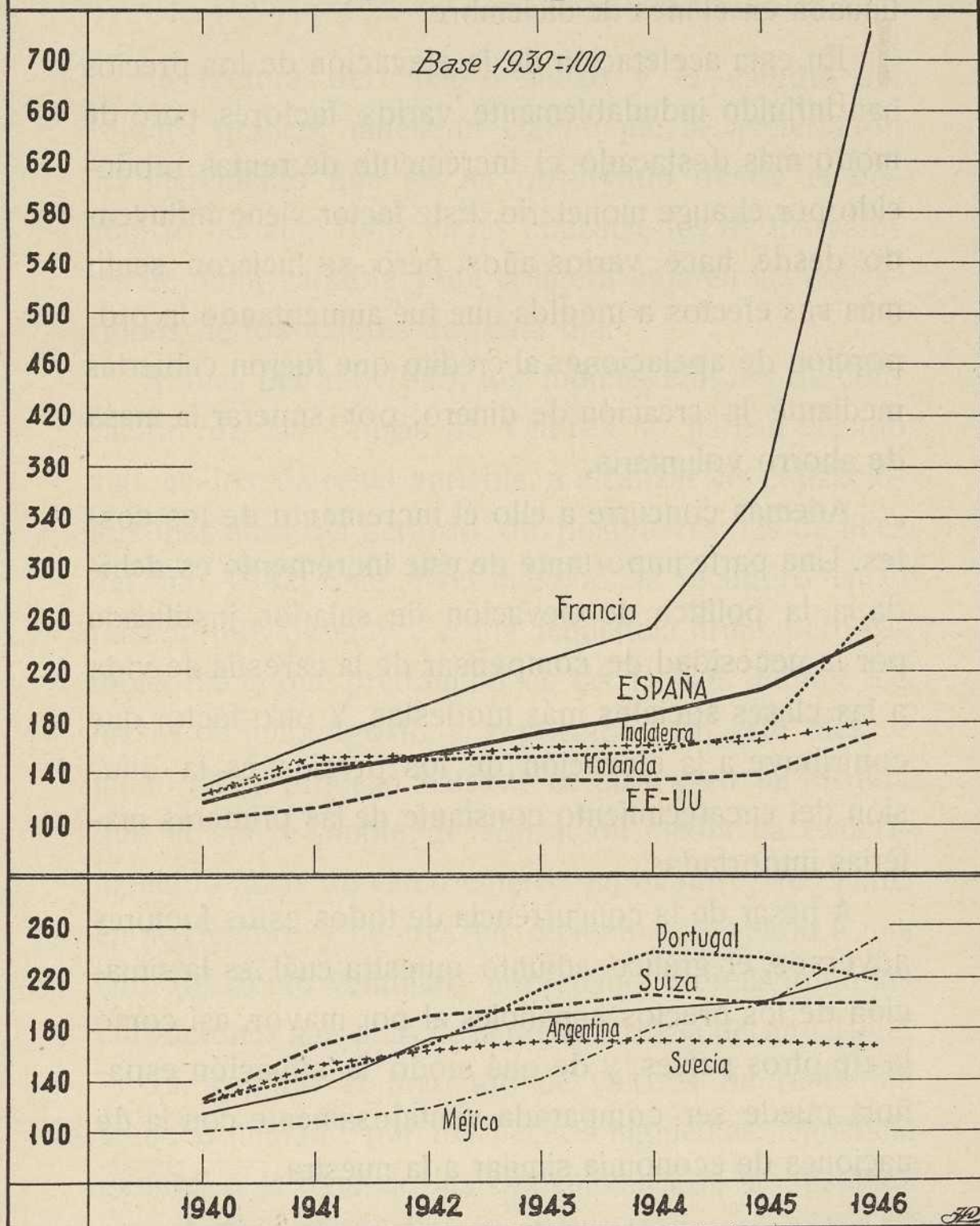
En cuarto lugar, ha vuelto a surgir un factor de expansión de la circulación que, aun cuando no actúa sobre el mercado y los precios, da lugar a la salida de nuevos billetes, y en este caso, en cuantía probablemente de consideración. Este factor es el atesoramiento.

Por último, las apelaciones al mercado de capitales, tanto por parte de las empresas privadas como por la del Tesoro público, han originado una demanda de disponibilidades en el mercado, buena parte de la cual ha tenido que ser satisfecha mediante crédito, con la consiguiente expansión de todos los signos representativos de este.

C) LOS EFECTOS SOBRE LOS PRECIOS

Los precios españoles han continuado en 1946 su tendencia alcista. Los índices de precios al por mayor que publica el Instituto Nacional de Estadística, transformados con arreglo a la base de precios 1939-100, acusan un alza a lo largo del año: ésta ha sido de alguna consideración en septiembre; ha proseguido con

*Indices de precios al por mayor, en distintos países,
según datos oficiales*



una nueva alza de cinco enteros en octubre y surge una tendencia de cierta estabilidad en noviembre, continuada en el mes de diciembre.

En esta aceleración de la elevación de los precios han influido indudablemente varios factores, pero de modo más destacado el incremento de rentas producido por el auge monetario. Este factor viene influyendo desde hace varios años, pero se hicieron sentir más sus efectos a medida que fué aumentando la proporción de apelaciones al crédito que fueron cubiertas mediante la creación de dinero, por superar la masa de ahorro voluntaria.

Además concurre a ello el incremento de los costes. Una parte importante de este incremento es debida a la política de elevación de salarios, justificada por la necesidad de compensar de la carestía de vida a las clases sociales más modestas. Y otro factor que contribuye a la elevación de los precios, es la difusión del encarecimiento constante de las primeras materias importadas.

A pesar de la concurrencia de todos estos factores adversos, el gráfico adjunto muestra cuál es la situación de los precios españoles al por mayor, así como la de otros países, y de qué modo la situación española puede ser comparada ventajosamente con la de naciones de economía similar a la nuestra.

D) EFECTOS EN LA BOLSA

La lectura del cuadro anexo y el estudio del adjunto gráfico, muestran claramente la aceleración del incremento que se ha observado desde el comienzo del año 1946, en las cotizaciones de los valores de renta variable y de la ligera baja en las cotizaciones de los valores de renta fija.

A fines del año 1945, los índices simples de cotización de las Bolsas de Valores no habían llegado aún, en los de renta variable, a alcanzar las cotizaciones más altas del período de postguerra: las de fines del año 1942. Este nivel máximo se recuperó en el pasado mes de mayo, y una tendencia firme, pero estable, fué la que predominó en las Bolsas durante los meses de julio, agosto y septiembre. En este mes se inició ya un proceso acusado de alza, y en tal medida que el índice simple de cotización media ha experimentado alzas de cinco enteros en octubre, de cuatro en noviembre y de tres en diciembre, llegando a una cifra de ciento veintiuno por ciento en relación a las cotizaciones más altas de la postguerra: la del año 1942.

En cambio el mercado de valores de renta fija viene dominado por los hechos siguientes: tendencia general a la baja de las obligaciones de las distintas sociedades industriales; mercado débil, con bajas en

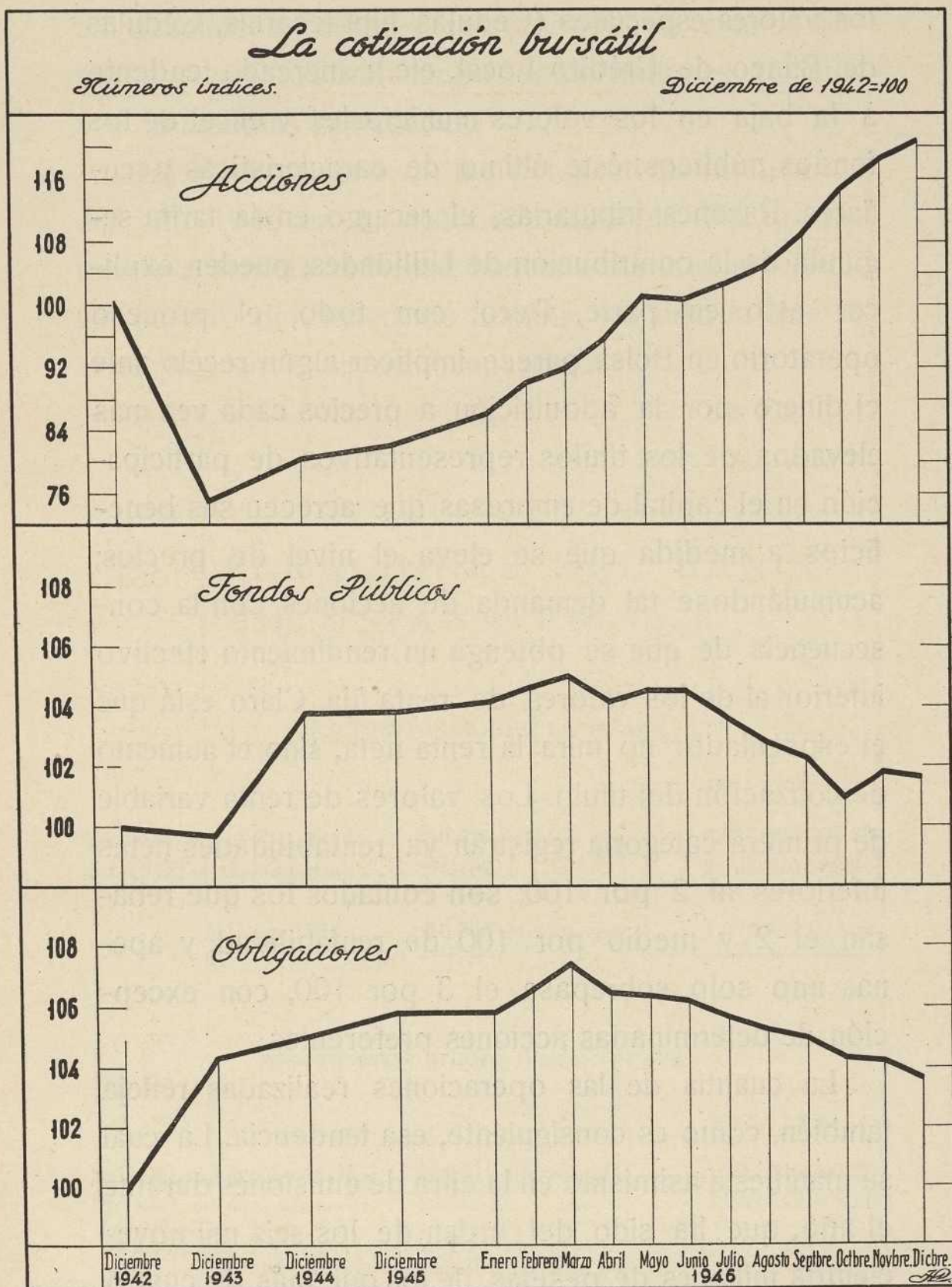
La Cotización Bursátil

Variación de los índices mensuales simples de cotización

Base: diciembre 1942 = 100

FECHAS	RENTA VARIABLE	RENTA FIJA			
	Acciones de Sociedades	Deuda del Estado y del Tesoro	Valores municipales y provinciales	Valores especiales	Obligaciones de Sociedades en general
1943					
Diciembre.....	74,9	99,8	100,5	99,0	104,3
1944					
Diciembre.....	80,3	103,9	101,6	100,7	105,1
1945					
Diciembre.....	82,1	103,9	101,9	100,8	105,8
1946					
Enero.....	86,2	104,2	101,8	101,1	105,8
Febrero.....	90,1	104,6	102,3	102,2	106,6
Marzo.....	91,8	105,1	102,6	102,4	107,4
Abril.....	95,5	104,1	102,0	102,1	106,4
Mayo.....	100,9	104,5	102,0	101,0	106,3
Junio.....	100,6	104,5	102,0	100,7	106,2
Julio.....	102,5	103,7	101,4	100,4	105,7
Agosto.....	104,7	102,9	101,3	100,3	105,2
Septiembre.....	109,2	102,3	101,1	99,6	105,0
Octubre.....	114,9	101,1	100,8	99,0	104,3
Noviembre.....	118,9	101,9	100,2	99,1	104,2
Diciembre.....	121,0	101,7	99,9	98,5	103,7

NOTA. — La serie de los índices mensuales de la cotización de los Valores del Estado y del Tesoro ha sido rectificada en 1946 para incluir en dicho grupo nuevas Deudas. Por eso las cifras de los años 1943, 1944 y 1945 no corresponden exactamente con las publicadas en años anteriores.



los valores especiales (Cédulas hipotecarias, Cédulas del Banco de Crédito Local, etc.); mercado tendente a la baja en los valores municipales y en el de los fondos públicos, éste último de características peculiares. Razones tributarias, el recargo en la tarifa segunda de la contribución de Utilidades, pueden explicar esto en parte. Pero, con todo, el proceso operatorio en Bolsa parece implicar algún recelo ante el dinero por la adquisición a precios cada vez más elevados de los títulos representativos de participación en el capital de empresas que acrecen sus beneficios a medida que se eleva el nivel de precios; acumulándose tal demanda de acciones con la consecuencia de que se obtenga un rendimiento efectivo inferior al de los valores de renta fija. Claro está que el especulador no mira la renta neta, sino el aumento de cotización del título. Los valores de renta variable de primera categoría registran ya rentabilidades netas inferiores al 2 por 100; son contados los que rebasan el 2 y medio por 100 de rentabilidad, y apenas uno solo sobrepasa el 3 por 100, con excepción de determinadas acciones preferentes.

La cuantía de las operaciones realizadas refleja también, como es consiguiente, esa tendencia. La cual se manifiesta asimismo en la cifra de emisiones durante el año, que ha sido del orden de los seis mil novecientos millones de pesetas, de los que más de cuatro

mil trescientos millones corresponden a efectos públicos y casi dos mil cuatrocientos millones a acciones de distintas sociedades.

Tal es el resumen de las perspectivas monetarias del año 1946 en la economía española. Por lo que toca a la estricta actividad bancaria durante el ejercicio pasado del Banco de España, ha sido la que se especifica en el siguiente apartado.

E) OPERACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA EN 1946

DESCUENTOS SOBRE LA PLAZA

			PESETAS
En 1946 se han descontado...	310.526 efectos, por ...		8.937.928.304,88
En 1945 se descontaron.....	294.182 — ...		7.165.270.382,20
Más EN 1946.....	16.344 efectos, por ...		1.772.657.922,68

DESCUENTOS SOBRE OTRAS PLAZAS

			PESETAS
En 1946 se han descontado...	264.318 efectos, por ...		892.156.707,22
En 1945 se descontaron.....	245.064 — ...		1.268.598.406,20
Más EN 1946.....	19.254 efectos, por ...	—	376.441.698,98

NEGOCIACIONES DE EFECTOS SOBRE PUEBLOS

P E S E T A S		
En 1946 se han descontado...	206.537 efectos, por ...	325.771.980,93
En 1945 se descontaron.....	205.367 — ...	298.255.530,34
MÁS EN 1946.....	1.170 efectos, por ...	27.516.450,59

CREDITOS Y PRESTAMOS CON GARANTIA DE VALORES MOBILIARIOS

P E S E T A S		
En 1946 se han abierto.....	17.912 pólizas, por ...	9.654.410.818,62
En 1945 se abrieron	18.254 — ...	6.471.382.182
MENOS EN 1946.....	342 pólizas, por ... +	3.183.028.636,62

P O R C E N T A J E S

P E S E T A S	
Garantías en valores del Estado, 99,23 por 100.....	7.245.357.863,70
Garantías en valores industriales, 0,77 por 100.....	55.941.957

CREDITOS CON GARANTIA PERSONAL

P E S E T A S		
En 1946 se han abierto.....	6.460 pólizas, por ...	1.521.418.966
En 1945 se abrieron	6.578 — ...	1.581.606.785
MENOS EN 1946.....	118 pólizas, por ...	60.187.819

CREDITOS CON GARANTIA DE EFECTOS COMERCIALES

P E S E T A S		
En 1946 se han abierto.....	14 pólizas, por ...	7.848.325
En 1945 se abrieron	15 — ...	7.909.650
MENOS EN 1946.....	1 póliza, por ...	61.325

CREDITOS Y PRESTAMOS SOBRE MERCANCIAS

		PESETAS
En 1946 se han abierto.....	14 pólizas, por ...	5.866.500
En 1945 se abrieron	5 — ...	2.501.750
MÁS EN 1946.....	9 pólizas, por ...	3.364.750

DEPOSITOS DE TODA CLASE DE PAPEL

	PESETAS
En 31 de diciembre de 1946 su saldo era de.....	15.528.797.835,55
En 31 de diciembre de 1945 su saldo fué de.....	14.721.492.701,69
MÁS EN 1946.....	807.305.133,86

DEPOSITOS EN ALHAJAS

	PESETAS
En 31 de diciembre de 1946 su saldo era de.....	22.444.068,58
En 31 de diciembre de 1945 su saldo fué de.....	21.633.600,87
MÁS EN 1946.....	810.467,71

CUENTAS CORRIENTES DE VALORES

	PESETAS
En 31 de diciembre de 1946 su saldo era de.....	3.193.621.158,23
En 31 de diciembre de 1945 su saldo fué de.....	2.122.629.723,55
MÁS EN 1946.....	1.070.991.434,68

GARANTIAS DE PRESTAMOS Y CREDITOS

	PESETAS
En 31 de diciembre de 1946 su saldo era de.....	7.307.884.268,71
En 31 de diciembre de 1945 su saldo fué de.....	4.838.816.136,10
MÁS EN 1946.....	2.469.068.132,61

VARIAS CUENTAS EN PAPEL

	PESETAS
En 31 de diciembre de 1946 su saldo era de.....	7.413.479,61
En 31 de diciembre de 1945 su saldo fué de.....	13.496.779,79
MENOS EN 1946.....	6.083.300,18

CUENTAS CORRIENTES

	PESETAS
En 1946 los documentos de adeudo y abono han sido de..... 1.597.915 por ...	245.855.450.704,29
En 1945 los documentos de adeudo y abono fueron de..... 1.581.779 por ...	232.964.766.299,39
MÁS EN 1946..... 16.136 por ...	12.890.684.404,90
El saldo de las cuentas corrientes (libres y desbloquea- das) en 31 de diciembre de 1946 es de.....	3.892.855.219,86
El saldo de las cuentas corrientes (libres y desbloquea- das) en 31 de diciembre de 1945 fué de.....	3.304.256.841,73
MÁS EN 1946.....	588.598.378,13

Las nuevas operaciones concertadas en 1946 han ascendido a pesetas 8.003.301.767,52, de las cuales un 73,72 por 100, por pesetas 5.900.063.567,08, han sido concedidas a la Banca.

RESULTADOS DE 1946

	PESETAS
Los beneficios íntegros del Banco han sido de.....	173.972.854,11
Gastos de Administración..... 84.521.101,77	
Gastos en la conducción de fondos... 471.113,47	
Gastos en la fabricación de billetes... 585.000	
Conceptos varios 11.181.528,76	
	96.758.744
Los beneficios líquidos obtenidos ascienden a.....	77.214.110,11

De los beneficios líquidos del año 1946, por pesetas 77.214.110,11, han participado los señores Accionistas en pesetas 24.899.271,25, lo que representa sobre las 354.000 acciones que constituyen el capital del Banco, un resto de pesetas 62,60 por acción, una vez deducida la contribución fijada al dividendo con arreglo a la Tarifa segunda de Utilidades.

Del resto de dicho beneficio, por 52.314.838,86 pesetas, se han aplicado pesetas 35.034.169,98 a la minoración de la Deuda especial creada por el artículo 7.º de la Ley de 13 de marzo de 1942, y a provisión para impuestos directos a pagar, devengados en el ejercicio de 1946, 17.280.668,88 pesetas.

Como conclusión de todo lo expuesto, el Consejo somete a vuestra aprobación la presente Memoria y Balance, que justifica su gestión en el ejercicio 1946.

Madrid, 19 de febrero de 1947.

EL COMISARIO DE LA BANCA OFICIAL,
GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA,
A. Goicoechea.

Los beneficios líquidos del año 1946 por pesetas 27.214.101,1 han pertenecido los señores accionistas en pesetas 24.898.371,15, lo que representa sobre las 354.000 acciones que constituyen el capital del Banco, un resto de pesetas 62,40 por acción, una vez deducida la compensación hecha al dividendo, con arreglo a la Ley de 1946 de Utilidades.

El resto de dicho beneficio por 22.314.838,66 pesetas, se han aplicado pesetas 13.012.199,04 a la continuación de la Junta general creada por la Ley de 1946, de la Ley de 13 de marzo de 1942, y a provisión para impuestos directos e indirectos, descontados en el ejercicio de 1946, 17.229.068,68 pesetas.

Como consecuencia de todo lo expuesto, el Consejo somete a vuestra aprobación la presente Memoria y Balance, que juntos se gestionan en el ejercicio 1946, acordado el 19 de febrero de 1947.

El Consejo de Administración
Presidente: D. Juan de Dios
Vicepresidentes: D. Juan de Dios
D. Juan de Dios

BALANCE

Balance de libros del Banco de España

ACTIVO

VALORES EFECTIVOS				PESETAS
	Pesetas oro	Premio de revalorización	Total del oro revalorizado	
Oro del Banco	129.278.667,20	333.151.125,40	462.429.792,60	
Idem adquirido por materialización del importe amortizado de la Deuda especial	7.905.832,98	20.373.331,56	28.279.164,54	
Idem del Tesoro	15.931.152,15	41.054.579,09	56.985.731,24	
Idem del Instituto Español de Moneda Extranjera	185.864.907,88	478.973.867,60	664.838.775,48	
Idem de cuentas corrientes.....	260.326,50	670.861,39	931.187,89	
Totales.....	339.240.886,71	874.223.765,04	1.213.464.651,75	1.213.464.651,75
Plata			722.350,75	
Plata recogida			514.820.368,01	515.542.718,76
Bronce y cuproníquel			14.429.717,17	
Efectos en Caja para su cobro.....			67.142.292,06	81.572.009,23
Corresponsales en el Extranjero.....				825.116,64
Cartera comercial:				
Descuentos			2.363.054.323,42	
Créditos:				
Pólizas personales	1.087.677.792,47			
Disponibles	435.388.109,18		652.289.683,29	
Pólizas con garantía	6.308.800.258,74			
Disponibles	2.882.297.180,72		3.426.503.078,02	
Pagarés de préstamos con garantía			2.238.092	
Otros efectos en Cartera.....			11.058.794,78	6.455.143.971,51
Cartera de renta:				
Deuda amortizable 4 por 100, 1942.....			366.355.500,70	
Acciones de Compañía Arrendataria de Tabacos y Tabacalera, S. A.			17.500.001	
Acciones del Banco de Estado de Marruecos.....			1.154.625	
Acciones del Banco Exterior de España.....			16.500.000	401.510.126,70
Deuda especial creada por el artículo 7.º de la Ley de 13 de marzo de 1942...			4.092.591.915,86	
Valores adquiridos con arreglo al artículo 9.º de la Ley de 13 de marzo de 1942.			100.000.000	4.192.591.915,86
Fondo para formar la reserva de la Caja de Pensiones. (Real decreto de 4 de julio de 1921).....				135.290.624,29
Inmuebles y mobiliario				116.352.818,87
Tesoro público.	Pólizas		10.050.000.000	
	Pagarés (Ley de 2 de agosto de 1899).....		69.997.679,43	
	Anticipos (Ley de 14 de julio de 1891).....		150.000.000	
	Por pago amortizaciones e intereses de la Deuda del Estado.....		235.085.551,75	
	Otras cuentas del Tesoro.....		423.945.986,18	
	Su cuenta corriente		2.233.616.855,47	13.162.646.072,83
Diversas cuentas				2.612.536.665,22
				28.887.476.691,66
VALORES NOMINALES				
Efectos en depósito			26.060.160.810,68	
Caja por billetes habilitados			48.698.780.532	
Billetes inutilizados			1.105.064.714	
Billetes cuyo importe se ha entregado al Tesoro.....			5.184.750	
Billetes en depósito			1.274.142.500	77.143.333.306,68
				106.030.809.998,34

en el día 31 de diciembre de 1946

PASIVO

VALORES EFECTIVOS

			PESETAS
Capital y reservas.	Capital	177.000.000	228.000.000
	Fondo de reserva	33.000.000	
	Idem de previsión	18.000.000	
Circulación	Billetes en circulación:		22.777.257.460
	De 25 pesetas a 1.000	21.922.833.550	
	De 1, 2, 5 y 10 pesetas	854.423.910	
Cuentas corrientes.	Libres	3.848.313.820,80	3.915.416.014,89
	Desbloqueadas	44.541.399,06	
	Depósitos en efectivo y otros saldos	22.560.795,03	
Tesoro público.....	Organismos autónomos	1.402.650.272,65	1.430.726.551,46
	Otras cuentas del Tesoro	28.076.278,81	
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar			440.491.935,08
Facturas amortización intereses, Deudas Estado.....			95.584.730,23

VALORES NOMINALES

			28.887.476.691,66
Depósitos de todas clases en papel.....	15.528.797.835,55		
Depósitos en alhajas	22.444.068,58		
Garantías de créditos y préstamos sobre efectos públicos	7.307.884.268,71		
Cuentas corrientes en valores	3.193.621.158,23		
Varias cuentas en papel	7.413.479,61		26.060.160.810,68
Billetes habilitados			51.083.172.496
			106.030.809.998,34

BENEFICIOS

		PESETAS
Beneficios obtenidos en los descuentos.....		75.776.422,31
— — en los préstamos sobre valores y mercancías.....		113.977,27
— — en las negociaciones sobre pueblos.....		2.579.560,25
— — por comisión e intereses en las cuentas corrientes con garantía de valores.....		33.511.533,56
— — por comisión e intereses en las cuentas corrientes con garantía de valores comerciales y mercancías.....		105.664,67
— — por comisión e intereses en las cuentas corrientes con garantía personal		31.668.352,84
— — en los descuentos de cupones y títulos amortizados.....		170.720,38
— — en los giros.....		26.634,79
— — en los intereses de demora en varias operaciones.....		1.434.475,19
Derechos de custodia		4.101.806,22
Rendimiento del papel del Banco.	Intereses de Deuda amortizable..... 14.657,375	
	Acciones Tabacalera, S. A. 1.266.943,12	
	Banco de Estado de Marruecos..... 332.210,73	
	Dividendo de las acciones del Banco Exterior de España..... 1.062.907,20	17.319.436,05
Comisión por pago de Deudas del Estado y Municipales.....		3.531.799
Comisiones de Caja		3.632.471,58
BENEFICIOS DEL AÑO 1946.....		173.972.854,11
B A J A S		
Gastos de administración	Madrid 37.357.226,76	84.521.101,77
	Sucursales 47.163.875,01	
— en la conducción de fondos.....		471.113,47
— en la fabricación de billetes.....		585.000
Conceptos varios		11.181.528,76
Total de bajas.....		96.758.744,00
R E S U M E N		
Beneficios totales		173.972.854,11
Importe de las bajas.....		96.758.744
Beneficios líquidos.....		77.214.110,11
D I S T R I B U C I O N		
Minoración de la Deuda especial creada por el artículo 7.º de la Ley de 13 de marzo de 1942		35.034.169,98
A los señores accionistas, 62,60 pesetas por acción sobre las 354.000 que constituyen el capital del Banco.....	22.162.841,34	
Impuesto sobre dividendos.....	2.736.429,91	24.899.271,25
Provisión para impuestos directos a pagar devengados en el ejercicio de 1946...		17.280.668,88
TOTAL.....		77.214.110,11

Billetes habilitados y en circulación

	S E R I E S									TOTAL — Pesetas
	De 1 peseta	De 2 pesetas	De 5 pesetas	De 10 pesetas	De 25 pesetas	De 50 pesetas	De 100 pesetas	De 500 pesetas	De 1.000 pesetas	
Billetes habilitados al 31 de diciembre de 1945.....	353.690.157	141.811.756	1.348.835.405	14.281.400	3.106.891.150	2.741.000.000	13.060.159.700	3.414.749.000	6.983.998.000	31.165.416.568
Billetes habilitados durante 1946:										
Emisión de 9 enero de 1940...	»	»	»	»	43.200.000	31.500.000	422.710.000	1.215.000.000	2.404.000.000	4.116.410.000
— de 13 febrero de 1940...	»	»	»	»	»	»	»	63.000.000	300.000.000	363.000.000
— de 15 junio de 1945...	102.250.000	»	385.000.000	»	»	»	»	»	»	487.250.000
Suma.....	455.940.157	141.811.756	1.733.835.405	14.281.400	3.150.091.150	2.772.500.000	13.482.869.700	4.692.749.000	9.687.998.000	36.132.076.568
Billetes quemados durante 1946...	58.336.259	32.411.438	213.231.350	5.509.700	211.158.200	136.412.400	275.675.300	»	»	932.734.647
Saldo de billetes habilitados al 31 diciembre 1946	397.603.898	109.400.318	1.520.604.055	8.771.700	2.938.932.950	2.636.087.600	13.207.194.400	4.692.749.000	9.687.998.000	35.199.341.921
Billetes en Depósito.....	14.250.000	1.200.000	62.500.000	»	323.700.000	79.992.500	184.500.000	236.000.000	372.000.000	1.274.142.500
Billetes útiles en las Cajas del Banco	28.904.171	284.142	112.500.805	28.540	277.898.875	423.797.500	1.922.532.300	544.012.500	1.474.289.000	4.784.247.833
» En las Cajas del Banco.....	62.349.443	20.003.966	223.005.550	3.863.770	927.145.600	518.313.000	1.040.038.400	114.393.000	347.881.000	3.256.993.729
» En Amortización	116.604.103	70.918.096	460.839.505	4.703.970	267.660.975	255.612.150	620.358.100	454.024.500	855.979.000	3.106.700.399
Billetes en circulación al 31 diciembre 1945	175.496.181	16.994.114	661.758.195	175.420	1.142.527.500	1.358.372.450	9.439.765.600	3.344.319.000	6.637.849.000	22.777.257.460
Total de billetes habilitados al 31 diciembre 1946	397.603.898	109.400.318	1.520.604.055	8.771.700	2.938.932.950	2.636.087.600	13.207.194.400	4.692.749.000	9.687.998.000	35.199.341.921

Exmo. Sr.:

Con fecha de ayer se ha dictado por el Ministerio de Hacienda la siguiente Orden:

«Vista la copia certificada del acta de las sesiones celebradas por la Junta general ordinaria de Accionistas del Banco de España en los días 3 y 10 del corriente mes, elevada por el Gobernador del Banco de España, en la que se transcriben, para su aprobación ministerial, los acuerdos tomados por dicha Junta, y

CONSIDERANDO que la adopción de los transcritos acuerdos se ha ajustado a las prescripciones contenidas en los Estatutos y el Reglamento por que el Banco se rige,

Este Ministerio, en virtud de las facultades que le están conferidas por el artículo 190 del mencionado Reglamento, acuerda prestar a dichos acuerdos la aprobación que para ser ejecutivos necesitan.»

Lo que me complazco en trasladar a V. E. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14 de marzo de 1946.—El Director General.—Firmado: Luis Sáez de Ibarra. — Sr. Gobernador del Banco de España.

A C U E R D O S

APROBADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LOS DÍAS 3 Y 10 DEL MES DE MARZO DE 1946

1.º Aprobar la Memoria, el Balance del Banco del ejercicio de 1945 y los actos de la Administración.

2.º Reelegir, con arreglo a los artículos 37 y 38 de los Estatutos, para los cargos de Consejeros, al Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes, al Ilmo. Sr. D. José Alvarez Guerra y Gutiérrez, y al Excmo. Sr. D. José Rivera y Urtiaga, Marqués de San Nicolás de Noras.

3.º Aprobar los dictámenes del Consejo sobre las proposiciones presentadas por varios señores Accionistas.

Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13 de marzo de 1946. — Firmado: El Gobernador, A. Goicoechea.—Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

DISCURSO

pronunciado por el Excmo. Sr. D. Joaquín Benjumea Burín, Ministro de Hacienda, en la sesión de las Cortes Españolas del día 30 de diciembre de 1946, en defensa del

PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN BANCARIA

DISCURSO

pronunciado por el Excmo. Sr. D. Joaquín
Benavides, Ministro de Hacienda, en
la sesión de las Cortes Españolas del día
30 de Septiembre de 1916, en virtud del

PROYECTO DE LEY DE
ORDENACIÓN FINANCIERA

Señores Procuradores: Todos sabéis que con el año expira el privilegio de emisión de billetes de que goza el Banco de España, y con ello ya está dicho que el Gobierno, en este momento, había de plantearse primero, y plantear luego ante vosotros, las cuestiones que se encierran en las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las exigencias de esta hora en relación con aquel suceso, de vencimiento forzoso y fijo? ¿Qué oportunidades ofrece? ¿Hasta qué límite y en qué medida han de satisfacerse? Las respuestas, a juicio del Gobierno, se contienen en el proyecto de Ley de Ordenación Bancaria sometido hoy a vuestros votos, de cuyo espíritu y alcance, contando con vuestra benevolencia, me ocuparé en las palabras con que, por deber ineludible de mi cargo, he de molestaros.

No he de cansar vuestra atención, que habré de solicitar para otros temas de obligado examen, con una detallada exposición de los antecedentes de la Banca de emisión en España. A modo de índice, me bastará con traer a vuestro recuerdo la creación, en 1782, por Carlos III, bajo la inspiración de Floridablanca, del Banco de San Carlos, del que fue Cabarrús su primer Director; la erección, en 1829, reinando Fernando VII, del Banco Español de San Fernando, al que se otorgó la facultad privativa de emitir billetes al portador pagaderos a la vista, y que empezó sus operaciones con los 40 millones de reales que recibió el de San Carlos, a su liquidación, en pago de sus créditos contra el Estado; la pugna del Banco Español de San Fernando con el de Isabel II, establecido en 1844, con análoga facultad de emisión; la fusión de ambos, siendo Ministro de Hacienda don Ramón Santillán, en 1847, bajo el nombre de Banco Español de San Fernando, exclusivamente autorizado en Madrid para la emisión de billetes; la Ley de 4 de mayo de 1849, refrendada por don Alejandro Mon, que organizó, a imitación del Acta inglesa de 1844, el Banco de San Fernando, a base de dos departamentos, uno de emisión y otro de descuentos, y que extendió su privilegio a toda España, con la recomendación de que procurase un acuerdo con los Bancos de Cádiz y de Barcelona; la Ley de 28 de enero de 1856, que sentó el principio de la pluralidad de Bancos de emisión—del que aun conservamos, como anacrónica supervivencia, en suspenso desde que nació, algún precepto de nuestro Código de Comercio, fiel en este punto a los principios liberales de la Ley de 19 de octubre de 1869—, y dió al Banco Español de San Fer-

nando la denominación de Banco de España, con la que, a través de una meritisima historia, casi centenaria, ha ganado la autoridad, prestigio y crédito de que goza, y, como término de esta fugaz evocación, el Decreto-ley de 19 de marzo de 1874, que lleva la firma ilustre del entonces Ministro de Hacienda don José Echegaray, que estableció definitivamente por medio de un Banco nacional, el de España, la circulación fiduciaria única, principio que, apoyado por la doctrina y por la experiencia, merece hoy el asentimiento universal. De todo este período pueden recogerse, como notas comunes y destacadas, éstas: los Bancos nacionales de emisión, a partir del primero, el de San Carlos, si es dable atribuirle este carácter, debieron su nacimiento a actos del Poder público, y fueron regulados, en su estructura y funciones, no obstante revestir la forma de Compañías anónimas, a base de un capital privado, por disposiciones de tipo legislativo, y su administración ha sido siempre intervenida directamente por el Estado, a través, primero, de los Comisarios regios, y, más adelante, de los Gobernadores designados por el Gobierno.

Y sin desconocer la importancia que en la historia del Banco de España representaron las Leyes de 1891 y 1902, llegamos al momento en que, con la Ley de Ordenación Bancaria de 29 de diciembre de 1921, se inicia una nueva etapa en la marcha del Banco emisor. Se estaba, como ahora, ante la inminente terminación del privilegio y, también como ahora, algunas voces se habían alzado pidiendo una simple prórroga de aquél. La ciencia económica había ya perfilado el concepto de los Bancos centrales y, al destacar sus finalidades de carácter público, definía sus obligaciones, que no habían de encerrarse en el ámbito de la circulación fiduciaria y de sus relaciones con la clientela, sino que habían de extenderse también a cuidar, dentro de sus medios, de la estabilidad de la moneda y de los cambios exteriores, a regular el crédito, a ejercer como deber anejo a su condición privilegiada, en sus relaciones con los demás Bancos, una a modo de alta tutela, y a producirse, en sus operaciones directas con el público, con especiales limitaciones. La Banca privada había ya adquirido entre nosotros gran importancia, aunque vivía falta de toda regulación. El momento era, pues, interesante y propicio, y aquella Ley, en lo que respecta al Banco de emisión, inició, tímidamente todavía, al ampliar su Consejo con representantes de la Agricultura, de la Industria y de la Banca privada, la obligada evolución, que el tiempo ha ido acentuando, desde la idea del Banco como empresa meramente privada, hacia lo que, como apotegma, sienta la doctrina que ha de ser un Instituto emisor; aumentó el capital del Banco a 177 millones de pesetas —cifra actual—, mediante la conversión en acciones de los Bonos entonces en circulación; estableció, por primera vez, como régimen compensatorio, la participación del Estado en los beneficios del Establecimiento; previno una posible acción interventora en el cambio internacional y en

el mercado monetario; consignó algunas disposiciones que, según su preámbulo, habían de conducir al Banco de España al tipo ideal de Banco de Bancos, doctrina entonces muy en boga, pero que en su integridad no todos admiten hoy, y, finalmente, prorrogó el privilegio de emisión por el plazo que ahora termina. Modificada esta Ley en algunos de sus preceptos por la de 26 de noviembre de 1931, que, entre otras variaciones, llevó al Consejo del Banco de España tres representantes del Estado, habrá de quedar totalmente sustituida, si aprobáis el proyecto que el Gobierno ha sometido a vuestra deliberación, a partir del primero de enero próximo.

Bajo el imperio, en lo fundamental, de estas normas sorprendió al Banco de España el Glorioso Alzamiento Nacional. Escindido, como el suelo de la Patria, quedaron en zona marxista su central y las más importantes sucursales. El Banco emisor, tan ligado a la economía nacional, sufrió, al par que ésta, los mayores quebrantos. Todos conocéis las cifras principales en aquellos extremos susceptibles de expresarse en números: 2.250 millones de pesetas oro extraídas de sus cajas, 23.000 millones de pesetas de que dispuso el Tesoro «rojo» y una masa de billetes nuevos, puesta en circulación bajo el dominio marxista, del orden de los 13.000 millones de pesetas. La resultante, en grandes líneas, para el Instituto emisor puede condensarse así: una desarticulación, en sus piezas esenciales, de todo el mecanismo de la circulación fiduciaria, al desaparecer la cobertura metálica que legalmente constituía su garantía y, con ella, las limitaciones automáticas establecidas para la circulación a base de esa misma cobertura; inconvertibilidad consiguiente del billete, y, en fin, desequilibrio real entre el activo y el pasivo del Establecimiento, lo que imposibilitaba la formación y publicación de sus balances, la celebración de sus Juntas generales y el desenvolvimiento por cauces normales de su actividad.

Ya durante nuestra Guerra civil, el Estado Nacional dió repetidas muestras de su preocupación en los referente a la estructuración monetaria y crediticia del país. Sirvan de ejemplo el Decreto-ley de 12 de noviembre de 1936, que, al anular los billetes puestos en circulación por el enemigo, deslindó la comunidad monetaria nacional de la roja, sentando un principio, impuesto por necesidades de defensa contra la inflación marxista, de trascendentales consecuencias, y la Ley de 27 de agosto de 1938, que proclamó, como facultad del Ministro de Hacienda, la de determinar las normas generales de la política del crédito, en relación no sólo con el Banco de España, sino con la Banca toda y con los demás establecimientos de carácter análogo. Lograda nuestra paz, la relativa proximidad de su fecha me releva de la obligación de molestaros con la cita de la serie de disposiciones dictadas con semejante propósito, y únicamente he de referirme a aquellas directamente relacionadas con la

situación en que hubo de quedar el Banco de España al término de nuestra Guerra civil. Son éstas las dos Leyes de 9 de noviembre de 1939, que dieron estado de derecho al de hecho en que se encontraba el Banco de España, por una de las cuales se declararon medio legal de pago con pleno poder liberatorio los billetes del Banco emisor, y por la otra se dejaron en suspenso determinados preceptos de la Ley de Ordenación Bancaria, entre ellos los relativos a la garantía y límites de la circulación fiduciaria, al impuesto especial establecido sobre ésta y a la convertibilidad de los billetes; otra, de la misma fecha, también de importancia, que autorizó al Banco de España para realizar las operaciones de mercado abierto, y la de 13 de marzo de 1942, en su totalidad vigente, que abordando el problema de fondo del Banco de España, el de la nivelación de su Balance, hizo posible que el Instituto emisor recobrara, según requería el interés general, la normalidad de su vida, y saliera así de tan dura prueba indemne en su prestigio y crédito. Permitidme, señores Procuradores, que me detenga brevemente en el examen de esta Ley, que constituye el antecedente inmediato del proyecto sobre el que vais a pronunciaros.

Me he referido ya a la situación en que hubo de quedar el Banco de España como consecuencia de nuestra Guerra civil. Cuando llegó el momento de considerar el problema, no tuvo un punto de duda el Gobierno en la apreciación de que la continuidad del Instituto emisor era de alta conveniencia nacional y que la normalización de su vida requería la intervención y el apoyo del Estado, que habría de prestarse, ello es claro, dentro de las directrices generales sentadas por éste en orden a la restauración jurídica y económica del país. Por esto, no podía adoptarse solución alguna que supusiera, como se propugnaba en la exposición elevada al Ministro de Hacienda por la Administración del Banco de España, el quebrantamiento del principio de insolidaridad del Estado Español con los actos del Gobierno marxista, ni que representara, como también se ha sostenido por algunos, reglas especiales de desbloqueo, materia ésta que, por afectar a todas las obligaciones dinerarias civiles y mercantiles nacidas o modificadas a partir del 18 de julio de 1936, exigía, por imperativos de justicia, las mismas normas para toda clase de entidades y personas, y así, sin diferencia alguna, se aplicaron al Banco de España. Es cierto, en relación con este último punto, que la Ley reguladora del desbloqueo, dando una prueba más de su sabiduría y prudencia, no incluyó al Banco de España en la compensación colectiva bancaria, ya que el ingente volumen de sus operaciones desbordaba del sistema; pero también lo es que la de 13 de marzo de 1942, a que me estoy refiriendo, dictada cuando las operaciones de desbloqueo practicadas permitían descontar sus resultados, atribuyó al Banco, como partidas que

habían de contribuir a la regularización de su Balance, no sólo el excedente que produjera la cuenta del Fondo de Compensación del Desbloqueo de las Entidades de Crédito y Previsión, sino también el remanente de las cuentas bancarias de titulares impropetables, saldos cifrados provisionalmente en los balances del Establecimiento en 350 millones de pesetas cada uno y que, en realidad, excederán en conjunto de los mil millones de pesetas. Pero esta suma no era bastante para compensar el desequilibrio resultante entre el activo y el pasivo del Banco, y el Estado se solidarizó, a estos efectos, con el Instituto emisor, al que entregó, en trato especial y favorable, para llenar los vacíos existentes en su activo, en la cuantía necesaria, un título de la Deuda especial creada por el artículo 7.º de la Ley de que me vengo ocupando, título que no constituía una mera declaración sin contenido real, ya que a su amortización había de destinarse, según la propia Ley, el importe íntegro de la participación correspondiente al Estado en los beneficios del Banco. Y he de señalar el hecho, señores Procuradores, de que, ni antes ni después de dictarse la Ley de 13 de marzo de 1942, he sabido de solución que, dentro del supuesto, para el Gobierno obligado, de la continuidad del Instituto emisor, resolviera el problema sobre bases distintas de las establecidas entonces.

Acabo de decir que el Estado, con la aportación del bono a que se contrae el artículo 7.º de la citada Ley, hizo posible el equilibrio del balance del Banco de España y que a la amortización de ese bono había de aplicarse, según la misma Ley, la participación íntegra que en adelante correspondiera al Estado en los beneficios del Establecimiento. ¿Podía alguien pretender que los esfuerzos necesarios para la normalización de la vida del Banco de España corrieran a cargo sólo del Estado? Ha procurado éste paliar las consecuencias de la guerra y ayudar, en todos los órdenes, dentro de sus medios, la reconstrucción nacional. Pero excedía de las posibilidades humanas, y así ha ocurrido en todas partes, borrar totalmente las consecuencias económicas de las vidas perdidas, de los trastornos experimentados, de los daños sufridos. Y de esta dolorosa realidad no podían quedar exentos los accionistas del Banco de España. Por la desembarazada marcha del Instituto emisor y por razones de supremo interés público, se sacrificaban, ya he dicho en qué forma, intereses del Estado, y por la desembarazada marcha de la Empresa habían de sacrificarse también intereses de los accionistas. ¿Cómo? Imputando, mediante la nueva escala establecida, una parte de los beneficios líquidos anuales de la Entidad al saneamiento de su propio Balance. Y así hubo de hacerlo la Ley, y de la equidad y prudencia que presidieron la formación de la nueva escala es prueba bastante la línea seguida desde entonces por la cotización de las acciones del Establecimiento. No olvidemos tampoco que la administración de un privilegio no debe ser fuente de lucros excesivos, y que tratándose del de la emisión de billetes es buena regla,

muy extendida por el mundo, la de no ligar estrechamente el dividendo y los beneficios.

Otro extremo importante, por estimarlo de urgencia, abordó la Ley de 13 de marzo de 1942, al acentuar la intervención estatal en el gobierno del Banco, requerida por el hecho de que, desaparecida ya la cobertura metálica de la circulación fiduciaria, quedaba ésta sin las normas que, en función de aquélla, la limitaban, y exigida también por la concepción, a mi juicio anacrónica, que no parece del todo extirpada en determinados elementos, respecto a la posición y actividades de los Bancos centrales.

Y llegamos ya, después de esta evocación del pasado, que bien temo os haya resultado fatigosa, a enfrentarnos con un presente, el de la inmediata terminación del privilegio de emisión, en el que el primer punto a resolver había de ser el de decidirse por uno de los términos de esta disyuntiva: nueva Ley de ordenamiento del Banco emisor o prórroga pura y simple de lo hoy estatuido respecto al mismo.

Los argumentos de los que sostienen la tesis de la prórroga, indefinida o por plazo fijo, pueden condensarse así: para unos, son muchos los temas, en orden a la economía, a las finanzas, a la moneda y al crédito, que están hoy sometidos a discusión y revisión en el mundo, para que las funciones de un Banco emisor puedan encuadrarse en los rígidos preceptos de una ley; para otros, hay que esperar los resultados de las grandes experiencias del Extranjero; para unos, el proyecto no responde al ideal de la escuela a que pertenecen o que ellos individualmente propugnan; para otros, no se ha agotado la información que la importancia del asunto requería. Bien supondréis que estas consideraciones no estuvieron ausentes de la mente del Gobierno; es más, puedo añadir que a ellas, en lo que, a mi juicio, tienen de fundadas, responde, en gran parte, la orientación y contenido del proyecto. Pero el Gobierno entendió que, en servicio del interés nacional, era obligado, desde el mismo día en que libremente podía hacerlo, reivindicar para el Estado la facultad de regular, por Ley, el Instituto emisor, sin plazos ni compromisos, desechando, desde luego, el fácil camino de las prórrogas. Y esto representa principalmente el proyecto, en el que, con respecto para el capital privado del Establecimiento y manteniendo su continuidad jurídica y sustancial, se acentúa la intervención del Estado en el Banco, iniciada ya, según os recordé, desde que nació en nuestro país el primer Banco de emisión, y que es también tendencia general en todos los Bancos centrales extranjeros; se introducen en la estructura del Banco emisor las modificaciones indispensables para el mejor servicio del interés público, que debe ser su orientación preponderante, y, retocado así, se huye de fórmulas estrechas que podrían resultar incompatibles con lo que el porvenir demande o con lo que la doctrina o la experiencia aconsejen. Por eso, podía deciros antes que en el

proyecto se han tenido en cuenta los mismos fundamentos invocados por los que impugnan su oportunidad, ya que bien puede afirmarse que recoge sólo lo que hoy merece el asentimiento general, prescinde de novedades técnicas de no comprobado éxito todavía, regula con flexibles normas sus actividades y, al no establecer plazo alguno, consiente en cualquier tiempo su modificación o reforma. He de añadir que las aspiraciones del capital privado del Banco de España, en relación con el fin del privilegio, se consignaron en la Memoria que, redactada por una Comisión mixta de Consejeros accionistas y de accionistas, y aprobada por unanimidad en la Junta general extraordinaria celebrada en 30 de junio último, fué presentada, a su tiempo, al Ministro de Hacienda, y figura, con los anexos correspondientes, entre la documentación enviada a las Cortes. El Ministro de Hacienda ha prestado a esta Memoria la atención que merece por su origen y contenido; pero he de decir también, ya que otra cosa hubiera sido contraria a los principios sustanciales del proyecto mismo, que éste os ha sido sometido íntegramente, sin tratos ni compromisos previos de ninguna especie.

Nada puede explicar mejor, creo yo, el sentido y alcance del proyecto que una concisa referencia a los principios que lo han inspirado. Son éstos:

1.º Toca al Gobierno dictar las normas generales de la política del crédito, en su doble aspecto cuantitativo y cualitativo, en relación con la Banca en general, y muy especialmente con el Banco de España, que es fuente y reserva del crédito.

2.º El privilegio de la emisión de billetes, con todo lo que la doctrina y la práctica universales le asignan como secuela, en orden a la economía nacional, a la estabilidad de la moneda, al crédito público y, dentro de él, muy significativamente, al bancario y a sus relaciones con el Estado, no puede ya ser materia de un contrato, en el que una de las partes, el Estado, otorgue por plazo fijo el ejercicio exclusivo de aquella facultad a cambio de ciertas compensaciones, a que se obliga la otra parte, consistentes en servicios, préstamos, anticipos y participaciones, mayores o menores, en los beneficios que la entidad concesionaria logre. Este viejo concepto, superado hace tiempo, es más insostenible hoy, si cabe, en que no se trata de la emisión de billetes pagaderos a la vista y con una determinada cobertura metálica, que automáticamente limite su cuantía, sino de la creación de moneda con pleno poder liberatorio, lo que es y ha sido desde hace siglos atributo del Poder soberano.

3.º La personalidad jurídica del Banco de España, propia e independiente, se mantiene sin solución de continuidad. No sería obra de buen gobierno la que no se asentara en el depósito de confianza, prestigio, experiencia y organización que ha ido acumulando a través de su historia

nuestro primer establecimiento bancario. La afirmación, por otra parte, de que el interés general ha de ser el norte de los Bancos centrales, ha ganado la categoría de axioma. A este concepto responden, entre otros preceptos, las modificaciones que se introducen en lo que se refiere a la organización y nombramiento de los elementos directivos del Banco, a la composición del Consejo y a la delimitación de las facultades que corresponden a la Junta general. Se ha estimado también que el capital privado del Banco de España, por ahora al menos, constituye un factor en la organización del Instituto emisor, del que hubiera sido temerario prescindir, porque aparte de los supuestos psicológicos que representan la esencia del crédito, el mantenimiento de ese capital privado ha de ser expresión de continuidad, signo y sostén de su autonomía, garantía de conducta y estímulo para una administración celosa.

4.º Las actividades y funciones del Banco emisor no deben encajarse en fórmulas rígidas, que dificulten o imposibiliten su actuación en épocas de crisis o frente a las circunstancias que en el porvenir puedan rodearle. En tiempos normales, ha de proceder, en sus relaciones con la Banca y en sus operaciones directas con el público, con la finalidad, modos y limitaciones que corresponden a su peculiar naturaleza.

No puedo excusarme, señores Procuradores, de destacar ante vosotros, en breve y objetivo comentario, algunos preceptos de los que forman la Sección dedicada al régimen del Banco emisor.

Continúa unido el cargo de Comisario de la Banca Oficial al de Gobernador del Banco de España, cuyas facultades se conservan intactas. Los dos adjuntos técnicos que hubo de crear la Ley de 13 de marzo de 1942, como medida de urgencia, mientras subsistiera la actual configuración del Instituto emisor, cumplida su misión, quedan suprimidos. Un Subgobernador, en lugar de los dos hoy existentes, ejercerá las facultades que el Gobernador no se reserve, y dos Directores generales a las órdenes inmediatas de aquél, y con voz, pero sin voto, en los Consejos, desempeñarán las funciones de gestión y ejecución que el Subgobernador les encomiende. Queda así simplificada la alta dirección del Establecimiento, con ventaja para su cohesión y, consiguientemente, para su eficacia.

Se varía—ya aludí antes a ello—la composición del Consejo general. Nuevos elementos corporativos, designados con intervención de los Sindicatos Nacionales, entrarán a formar parte de él. Los Consejeros representantes de los accionistas, hoy en número de quince, se reducen a doce, mediante amortización de las vacantes que ocurran, y siguen, por tanto, constituyendo, con gran diferencia, el grupo más numeroso. El Gobernador y la Delegación del Gobierno conservan la facultad de oponer su veto a las resoluciones del Consejo.

La idea, más o menos fundada, de la soberanía de las Juntas generales,

tan frecuentemente aplicada tratándose de empresas privadas cuya finalidad primera o exclusiva es el lucro, nadie osaría mantenerla refiriéndose a un Banco central. Las directrices de éstos no deben ser impuestas por los votos de los poseedores de unas acciones. Por ello se precisan en el proyecto las atribuciones de la Junta general de accionistas del Banco de España, que consisten sustancialmente en elegir sus Consejeros y conocer y pronunciarse sobre la Memoria, el Balance y la gestión del Consejo. La aprobación definitiva de la Memoria y del Balance se atribuye al Ministro de Hacienda; y, en caso de haber formulado oposición la Junta general, al Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Estado. Quedan de este modo garantizados los intereses legítimos de los accionistas y circunscritas las atribuciones de la Junta general al ámbito de su competencia, con el beneficio que para el interés general pueda derivarse del ejercicio de su función fiscalizadora, en lo relativo al cumplimiento de los preceptos legales, estatutarios y reglamentarios.

Ya he dicho que no parece prudente llevar a la Ley fórmulas a las que inflexiblemente haya de acomodarse la concesión de crédito por el Banco de España. Autores eminentes sostienen la conveniencia de que los Bancos centrales gocen de grandes facultades, para poder emplearlas en épocas de crisis. Razones de oportunidad así lo aconsejan también. ¿Quién se atrevería hoy a predecir las finalidades preponderantes en que habrá de inspirarse una política de crédito en un futuro más o menos próximo? ¿Será la regulación del cambio exterior, la estabilidad de la capacidad de compra de la valuta en el interior, el incremento de la producción, la expansión del comercio, las necesidades de la reconstrucción nacional o los imperativos sociales y cristianos de la llamada ocupación total? Mejoremos, pues, el instrumento a utilizar; pero no limitemos de antemano su empleo. Por otra parte, las facultades que en el proyecto se reconocen al Gobierno, en orden al control del crédito, la representación del Estado en el Banco y la misma composición del Consejo, aseguran que las actividades del Instituto emisor habrán de responder a lo que la política económica y la coyuntura demanden. En este orden de ideas, no se ha llevado al proyecto la exigencia de una tercera firma en las operaciones del Banco, aunque en todo él palpita la idea de los modos y limitaciones que su condición privilegiada le imponen; y en cuanto a la clasificación de sus operaciones en prohibidas, privativas y libres, las primeras ya figuran en el proyecto y en los Estatutos del Establecimiento; las segundas, en las que se ha pretendido aludir a la obligación de determinados organismos de la Administración pública de llevar sus cuentas, con arreglo a la Ley de 14 de marzo de 1943, al Banco de España, no constituyen un derecho reconocido a éste, y no son, por tanto, de este lugar, y las últimas, en el sentido que se les quiere dar de derecho y facultad omnímodos, son incompatibles con la naturaleza y fines de un Instituto emisor.

Mantiene el proyecto las bonificaciones obligatorias que hoy se conceden a los Bancos y banqueros en sus operaciones de redescuento y en los avales que presten en determinadas condiciones. La Ley de Ordenación Bancaria de 1921 creó una percepción sobre las operaciones directas de descuento del Banco con particulares, consistente en los dos tercios de las referidas bonificaciones, percepción que había de caducar en cuanto se implantara un impuesto sobre los billetes no cubiertos con garantía metálica, lo que tuvo lugar, en efecto, en la reforma de 1931. Inexistente hoy este impuesto, parece obligado, como hace el proyecto, restablecer aquella percepción, con lo cual, además, sin renunciar al eficaz instrumento de intervención y vigilancia en el mercado del dinero que constituyen las operaciones directas del Instituto emisor con el público, en las adecuadas condiciones de baratura y facilidad, se elimina el factor de perturbación que podrían traer a esta materia los estímulos inherentes al mayor provecho derivado de tales operaciones, en relación con las efectuadas a través de la Banca privada.

Tiene también interés el precepto referente a las relaciones en general del Banco de España con la Banca privada, pues, aunque por su índole no imponga a éste ninguna obligación determinada, esboza los rasgos propios de un Banco central, en cuanto, por una parte, previene que en sus operaciones con aquélla atemperará su actuación al buen cumplimiento de las normas dictadas sobre política crediticia, y por otra, formula el concepto —que la doctrina y la práctica vienen asignando al Instituto emisor— de órgano al que corresponde, cuando así convenga al interés general, y dentro de la seguridad de sus operaciones, orillar las dificultades transitorias en que puedan encontrarse, sin su culpa, los establecimientos de crédito que hayan seguido en su actuación las buenas prácticas bancarias.

Como medida de buen orden contable, que ha de contribuir a la claridad del Balance, se previene en el proyecto que se fusionarán en una deuda especial, incorporándose al título nominativo a que se refiere el artículo 7.º de la Ley de 13 de marzo de 1942, las pólizas y anticipos del Tesoro y las demás cuentas y saldos anteriores a 1 de enero de 1942 a cargo del Estado. Y llevando a sus últimas consecuencias el criterio sentado en aquella Ley, se destina a la amortización de la aludida deuda el importe íntegro de cuantos ingresos corresponden, según la misma, al Estado, a saber: el total monto de su participación en los beneficios del Banco, el de los billetes retirados de la circulación y no presentados en plazo, el de la percepción sobre operaciones directas de descuento que realice el Banco con particulares y el de la plusvalía, en su caso, del oro y de la plata. Quiere ello decir que con tales sumas no se nutrirá, como ocurría antes de la Ley de 13 de marzo de 1942, el presupuesto de ingresos del Estado, y que todas ellas, sin deducción alguna, habrán de destinarse al saneamiento del Balance del Instituto emisor.

Aumento del capital del Banco de España.—Estimaba el proyecto de Ley que no existía razón de interés general que aconsejara, desde luego, un aumento del capital del Establecimiento, ya que el crédito del Instituto emisor y del billete se sustenta hoy en otras bases. Por otra parte, tal aumento no repercutiría para nada en las operaciones del Banco ni incrementaría sus beneficios, aunque sí, claro es, reduciría la participación correspondiente a cada acción. La Comisión de Hacienda, en su dictamen, ha incorporado al proyecto lo que sobre el particular establece la legislación vigente, según la cual está facultado el Gobierno para autorizar el aludido aumento, pero siempre con estas dos condiciones: que no sufra merma la participación del Estado—hoy la porción destinada al saneamiento del Balance—por la aplicación de la escala correspondiente, ni disminución tampoco los impuestos generales que tengan carácter progresivo.

El tema de la participación del Estado en los beneficios del Banco, o de la participación de los accionistas en los provechos derivados de la administración del privilegio, que de ambos modos puede enunciarse, es ciertamente delicado. La escala de participaciones no puede establecerse como la consecuencia rigurosa de un razonamiento u operación. Es forzosamente materia que, por su repercusión inmediata en la valoración de las acciones, ha de abordarse con la mayor prudencia y sólo cuando militen razones muy claras que justifiquen la innovación. Ordenado este punto en la ocasión y con el criterio de que me ocupé—por la Ley de 13 de marzo de 1942, que regularizó el Balance del Banco de España después de los quebrantos y depredaciones de que fué víctima bajo dominio marxista—no hay motivo suficiente para alterar hoy en ningún sentido la aludida tarifa.

Los derechos económicos de los accionistas en nada, pues, los varía el proyecto. Su intervención en la marcha administrativa del Establecimiento — no superada en los Bancos centrales de los principales países — garantiza debidamente sus intereses. Sirva de muestra el precepto según el cual no podrá concederse por la Comisión correspondiente crédito alguno contra el voto de sus representantes, aunque se hallaren en minoría. Y sin embargo, y más bien como pública advertencia del paso importante que la nueva Ley supone, se concede a los accionistas un derecho de opción, para que los que no deseen conservar sus acciones puedan desprenderse de ellas con arreglo al tipo medio de cotización en los cinco años anteriores a 30 de junio del presente año. Con lo cual no puede haber sombra de perjuicio para los accionistas, porque, no tratándose de una expropiación forzosa, la opción que se les otorga en nada merma su derecho a conservar o enajenar sus títulos al precio en que el mercado financiero los estime.

La Sección segunda del título I del proyecto se refiere a los demás Bancos oficiales. Rígense éstos por disposiciones especiales y por sus Estatutos y Reglamentos, y por ello los preceptos de dicha Sección, forzosamente breves, se limitan a afirmar tal especialidad con la declaración de que no les son aplicables las disposiciones del título II sobre régimen de la Banca privada; a dar unidad a las atribuciones del Comisario de la Banca oficial, o, en su caso, de los Gobernadores especiales que puedan designarse para estos Establecimientos, y a hacer algunas declaraciones sobre facultades que corresponden al Ministerio de Hacienda en relación con todos ellos.

El cargo de Comisario de la Banca oficial responde, y así lo ha demostrado la experiencia, a la necesidad de que las directrices a que hayan de ajustarse los Establecimientos que constituyen aquélla se inspiren en los mismos principios. En el proyecto, pues, se mantiene aquel cargo, que ha de ir siempre unido al de Gobernador del Banco de España, sin perjuicio de que, en relación jerárquica subordinada al mismo, y sin mengua de la aludida unidad de dirección, pueda el Gobierno, si lo creyera conveniente, nombrar Gobernadores para los distintos Bancos oficiales.

Dedica el proyecto su título II al régimen de la Banca privada. Impuesto el momento en que había de abordarse el problema del Banco emisor, no cabía rehuir el examen del de la Banca privada, tan íntimamente ligado a aquél. Las varias e importantes disposiciones dictadas en estos últimos años sobre el mecanismo del crédito han tendido a imprimir a éste la unidad de dirección precisa para que, como parte de la política económica, responda a las orientaciones que en materia de tanta trascendencia nacional sólo al Gobierno toca señalar. Excuso decir, por tanto, que el proyecto representa, en su conjunto, la confirmación de ese principio, y en alguno de sus preceptos, un avance en el camino emprendido. Contribuye también a este propósito la refundición y ordenación de las disposiciones vigentes, hoy múltiples y dispersas, que se hace en el proyecto, a fin de que queden claras y definidas en un cuerpo legal, con lo que ganarán en eficacia las facultades que en este orden competen al Gobierno, al Ministro de Hacienda, al Director general de Banca y Bolsa y al Consejo Superior Bancario, así como también las normas reguladoras de la actividad de los Bancos y banqueros. Cumpla, por otra parte, un deber de justicia diciéndoos que, en mi entender, la realidad que en conjunto ofrece la Banca privada española no desmerece de la de los países más cultos y adelantados, y que por su conducta y técnica es merecedora del crédito de que goza.

Me referiré, brevísimamente también, a algunos preceptos nuevos de indudable interés.

Se precisa, en primer lugar, el concepto, y se refuerzan las prohibiciones referentes al ejercicio de la profesión y al uso de la denominación de «Banco» o «Banquero» sin la previa autorización del Gobierno.

En relación con posibles situaciones difíciles o incorrectas, y en defensa de los depositantes, se faculta al Ministro de Hacienda, con la limitación del previo informe favorable del Consejo Superior Bancario, para ordenar a un determinado Banco o banquero que depositen en el Banco de España el porcentaje que le señale de sus recursos ajenos, sin exceder del 20 por 100 de éstos.

El Comité Central de la Banca Española, al que se denomina nuevamente en el proyecto Consejo Superior Bancario, por entender que este nombre es más adecuado a su actual significación y funciones, ha experimentado en estos últimos tiempos reformas de importancia. Sus facultades resolutivas, juntamente con las que correspondían a la Comisaría de Ordenación de la Banca Privada, han sido transferidas al Ministerio de Hacienda, y por otra parte, se le han asignado funciones de derecho público. Quedó así con un carácter principalmente consultivo, y ligado aun más estrechamente a los organismos oficiales del Estado. En el proyecto se recoge el sentido de estas disposiciones y se da entrada en el mismo a una representación del Sindicato Nacional de Banca y Bolsa y de la Banca oficial. La presidencia del Consejo se atribuye al Director general de Banca y Bolsa, por creer que ha de ser provechosa y eficaz su relación personal y frecuente con la representación autorizada de la Banca privada y la captación directa de sus problemas y aspiraciones; presidencia sin voto, para conservar así delimitadas e independientes las esferas en que, dentro de su respectiva competencia, han de producirse las deliberaciones del Consejo y ejercerse a su tiempo, cuando así proceda, la autoridad del Director. Es también de interés la clasificación de los Bancos, a los efectos de su representación en el Consejo, en nacionales, regionales y locales, prescindiendo, a estos fines, de las antiguas zonas territoriales, sin otra base que la geográfica. Y, por último, en relación con este punto, queda igualada en derechos y deberes toda la Banca privada, mediante su obligatoria adscripción al Consejo Superior Bancario.

Ante la conveniencia de que, en determinadas circunstancias, no permanezcan ocultos las personas o los grupos que controlan la gestión de los Establecimientos bancarios, se dispone que sean nominativas las acciones de los Bancos constituidos bajo la forma de Sociedades anónimas o comanditarias por acciones.

También, y por motivos de unidad, se prescribe que toda la Banca habrá de ajustar su ejercicio económico al año natural.

Por último se regula cuidadosamente la importante materia de infracciones y sanciones. Ha de hacerse notar que el límite máximo de las multas se eleva de 25.000 pesetas, en que está hoy fijado, a 150.000, o en

los casos en que la infracción tenga base cifrable, a una cantidad proporcionada a ésta, y que en la escala de sanciones puede llegarse a la suspensión en sus funciones de los elementos directivos de las Empresas, con o sin nombramiento de administradores provisionales, y a la exclusión del Registro de Bancos operantes en España, con la consiguiente disolución y liquidación de la entidad sancionada.

Aunque ello no sería indispensable después de todo lo que llevo dicho, no quiero concluir, por la consideración que me merecen sus autores, sin dedicar unas palabras al voto particular contra la totalidad del dictamen, y en el que, en sustancia, se propugna la conveniencia de proceder a un estudio más detenido del problema y de preparar una Ley de Ordenación del crédito, cosa distinta, y desde luego más amplia, que la que sometemos a vuestra aprobación. Como el título del proyecto expresa, la Ley es simplemente de Ordenación bancaria, y por eso no se han llevado a ella las materias de Bolsa y Seguros, a que en el voto particular se alude, ni otras que en aquel amplio concepto habría lógicamente que incluir. He de decir también que desde hace meses, por tratarse de un problema con plazo de vencimiento conocido, los órganos competentes del Ministerio de Hacienda le han dedicado, a petición mía, toda su atención, aportando los antecedentes, tanto de carácter teórico como práctico, de que se podía disponer en el momento actual y cuyo conocimiento estimé necesario. Por lo demás, difícilmente podría pretenderse de un gobernante que esperara, para resolver los problemas nacionales, a que la doctrina hubiera pronunciado su última palabra o a que la experiencia hubiera agotado sus aleccionadores ejemplos. Concretamente, en lo que es materia de la Ley, han sido oídos el Banco de España, la Banca privada y en último término las Cajas de Ahorros. En cuanto a los Sindicatos nacionales, que tan importante representación tienen en la Comisión de Hacienda y en las Cortes, han intervenido eficazmente en la confección del dictamen sobre el proyecto, conocido por todos desde su publicación en el *Boletín* de las Cortes en los primeros días de noviembre último. Más breve ha sido la gestación de Leyes aprobadas en época reciente en importantes países extranjeros sobre materia análoga y con alcance mucho más trascendental. Insistentemente me he referido a la flexibilidad del proyecto; y ahora os diré, recogiendo la alusión que se hace en el voto particular a determinados organismos internacionales, que si se estimara de conveniencia nacional la participación de España en ellos, no habría quizá que modificar el texto de la Ley en una sola línea para que tal propósito tuviera realidad. Finalmente, no cabe admitir que la discusión de un proyecto de Ley, en la que precisamente para que tenga eficacia han de manifestarse opiniones distintas, pueda proyectar la menor sombra sobre la unidad sagrada de que en estos momentos han de dar y dan muestra los españoles, y res-

pecto de la cual no cabría explicar por qué habría de ser más fuerte la unidad ante la persistencia de una situación que muchos, y con ellos el Gobierno, estiman necesitada de reforma, que ante la reforma misma, inspirada en el deseo de fortalecimiento de las instituciones bancarias y del mejor servicio del país. La unidad de los españoles se basa no en intereses, que toda Ley de carácter económico necesariamente ha de tocar de un modo u otro, sino en sentimientos más hondos y perdurables.

Tales son, señores Procuradores, las líneas fundamentales del proyecto de Ordenación bancaria sometido a vuestros votos. Creo, y ha creído el Gobierno, que representa un serio pero prudente avance en la estructuración crediticia del país, que, con la monetaria, constituye el asiento de las economías nacionales. Parte el proyecto, según habréis apreciado, de la realidad española; se acomoda a las tendencias hoy predominantes en la doctrina y en la práctica, y libera, en estas materias, el porvenir de toda hipoteca que suponga plazo o compromiso. Podéis votarlo, entiendo yo, con la tranquilidad de conciencia de que, al hacerlo así, servís lo que, en este orden, la hora actual exige. Y con la satisfacción también de que el Gobierno y las Cortes puedan serena, tranquila y meditadamente dedicar sus cuidados a estos trascendentales problemas, tan ligados al progreso de la Patria, en el seno de una paz que ganó el Caudillo, y que mantiene y defiende, con la ayuda de Dios, contra cuantos intentan, más allá de nuestras fronteras y de espaldas a toda moral y justicia, acabar con ella.

LEY DE ORDENACIÓN BANCARIA

de 31 de diciembre de 1946.

Termina en 31 de diciembre próximo el privilegio de emisión de billetes concedido al Banco de España; y ello crea un ineludible problema de trascendencia nacional que es preciso abordar, y que puede ser resuelto, atendido el momento actual, con las normas y directrices en que se inspira la presente Ley.

No representa ésta ninguna innovación fundamental. Supone, por el contrario, una afirmación de continuidad en la orientación que inició en nuestra Patria la Ley de Ordenación Bancaria de 29 de diciembre de 1921, y que han ido jalonando, en marcha paralela a la seguida por los Bancos centrales de todos los países, las de 24 de enero de 1927, 26 de noviembre de 1931 y 13 de marzo de 1942. Y dentro de esta línea general, la Ley huye deliberadamente de toda clase de fórmulas rígidas, que pudieran ser incompatibles con lo que las circunstancias del futuro, hoy imposibles de prever, pudieran demandar en orden a nuestra política crediticia; prescinde también de novedades técnicas de eficacia no suficientemente comprobada, y de ensayos más o menos audaces llevados en otros países a la práctica.

Los principios, esquemáticamente enunciados, en que la Ley se basa son éstos: al Gobierno corresponde dictar las normas generales de la política del crédito; el privilegio de emisión, en toda circunstancia, y con más razón, si cabe, cuando su concesión entraña la facultad de crear moneda con pleno poder liberatorio sin la contrapartida de una cobertura metálica, no debe ser objeto de contrato con el Estado, y es a éste, que confiere a la moneda circulante aquel poder, a quien toca, como función de pura soberanía, condicionar y regular la concesión y el uso del citado privilegio; la personalidad jurídica del Banco de España, de meritoria historia, debe mantenerse sin solución de continuidad, procurando afirmar en él, con la mira puesta en el interés general, su condición de instrumento eficaz al servicio de la economía nacional, y dotándole de la flexibilidad necesaria para hacerlo adaptable a las circunstancias que la marcha del tiempo pueda traer consigo; la participación del capital privado, sin perjuicio de la intervención estatal, imprescindible en una función de primordial interés público, constituye la mejor expresión de esa continuidad a que se aspira, y ha de ser a la par garantía de conducta y estímulo para una celosa administración, y, finalmente, al Instituto emisor corresponde cerca de la Banca privada una misión de guía y de ayuda, que ha de ponerse de manifiesto especialmente en casos de dificultades de carácter transitorio por que pueda atravesar aquélla.

Tampoco supone esta Ley novedad ni variación en lo que respecta a los derechos económicos de los accionistas, a los que incluso se ofrece

una opción para dejar de serlo, si les conviniere, en condiciones de indudable equidad y de merecido respeto para sus intereses.

La Ley se ocupa también de los demás Bancos oficiales, aunque manteniendo en vigor, como es lógico, sus reglas y Estatutos fundacionales.

Trata luego de la Banca privada, tan estrechamente ligada al Instituto emisor, recopilando y refundiendo una multitud de disposiciones, hoy fragmentarias y dispersas, dictadas sobre la materia a partir de la Ley de Ordenación Bancaria, y regulando, bajo las directrices que presiden todo el sistema y con su primitivo nombre de Consejo Superior Bancario, la composición y funciones del hoy llamado Comité Central de la Banca Española.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

DISPONGO:

TÍTULO PRIMERO

Del Banco de emisión y de los demás Bancos oficiales

SECCIÓN PRIMERA

DEL BANCO DE EMISIÓN

ARTÍCULO 1.º El Banco de España, con arreglo a esta Ley, continuará teniendo a su cargo el régimen y administración del monopolio de la emisión de billetes de curso legal; cumplirá las funciones que, en orden a la economía nacional y en su relación con el Estado, se le encomiendan en la presente Ley, y realizará las operaciones y servicios propios de los Bancos de depósito y descuento, con la finalidad, modos y limitaciones que corresponden a su peculiar naturaleza y se determinan en esta Ley y en los Estatutos.

Se regirá, en cuanto no esté previsto en las disposiciones especiales que le afecten y en sus Estatutos, por la legislación común; gozará de personalidad jurídica independiente y de plena capacidad, acomodándose a sus Estatutos, para los actos de la vida civil y mercantil, y estará sujeto a los impuestos, derechos y tasas establecidos o que se establezcan para las Sociedades anónimas en general y para las Empresas bancarias en particular.

Ostentará su representación, en general, el Gobernador o quien legalmente le sustituya, y en los actos que impliquen compromiso u obligación, la persona a quien, según los Estatutos, corresponda.

ART. 2.º Corresponde al Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en relación con el Banco de España, y sin perjuicio de las facultades que el presente texto y demás disposiciones legales le atribuyen:

a) Dictar las normas generales de la política de crédito que deba seguir el Banco.

b) Fijar el tipo de descuento de los efectos comerciales y del interés de las demás operaciones.

c) Acordar la actuación del Banco en orden a la adquisición y enajenación, por su cuenta, de fondos y efectos públicos, en mercado abierto.

d) Dar instrucciones, con carácter general, al Banco acerca de la mayor o menor amplitud con que haya de proceder, según las circunstancias, en la concesión de créditos, sin perjuicio de la facultad que a aquél corresponde para apreciar y decidir sobre la seguridad suficiente que cada caso ofrezca, y ateniéndose siempre a los requisitos exigidos por los Estatutos y el Reglamento.

La actuación del Gobierno se efectuará por iniciativa suya o a propuesta del Consejo del Banco. En el primer caso, el Gobierno consultará con el Consejo del Banco, y tanto en uno como en otro, si lo estima procedente, con el Consejo Superior Bancario y el de la Economía Nacional.

ART. 3.º El Gobernador del Banco de España, cargo que irá unido al de Comisario de la Banca oficial, ostentará el doble carácter de representante del Estado, correspondiéndole en tal concepto la presidencia de la Delegación del Gobierno en el Establecimiento, y de Jefe superior de la administración del mismo. Presidirá, además, el Consejo General del Banco.

Será nombrado y separado libremente por el Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda.

ART. 4.º Un Subgobernador de carácter técnico, designado libremente por el Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, ejercerá las funciones, especialmente las que correspondan al régimen administrativo del Establecimiento, que no se reserve el Gobernador, sometiendo a resolución de éste los asuntos que se haya reservado; sustituirá al Gobernador en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, y formará parte, con voz y voto, del Consejo y, en su caso, de las Comisiones. El Director general más caracterizado sustituirá al Subgobernador en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. El Subgobernador podrá ser separado libremente por el Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda.

ART. 5.º Dos Directores generales nombrados por Decreto a propuesta, en terna, del Consejo del Banco, desempeñarán, a las órdenes inmediatas del Subgobernador, las funciones de gestión, administración y ejecución que éste les encomiende, debiendo cumplir y hacer cumplir al personal del Establecimiento las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como las emanadas del Gobernador, del Subgobernador, del Consejo General y de las Comisiones, en su caso. Asistirán al Consejo y a las Comisiones, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 6.º y 7.º. Sólo podrán ser separados, en su caso, con arreglo a lo prevenido en los Estatutos.

ART. 6.º El Consejo General del Banco, al que corresponderá, con arreglo a las Leyes y con las salvedades consignadas en este texto, dirigir la marcha del Instituto y asumir la gestión y alta administración del mismo, a tenor de los Estatutos, estará constituido en la forma siguiente:

El Gobernador del Banco, como Presidente.

El Subgobernador.

El Director general de Banca y Bolsa.

Cuatro Consejeros, nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda, representantes de los intereses generales de la economía nacional.

Uno, designado por el Ministro de Hacienda entre los Consejeros, Directores y altos funcionarios de los demás Bancos oficiales.

Dos, designados por el Consejo Superior Bancario.

Uno, designado por el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.

Uno, designado por las Juntas Centrales Económicas de los Sindicatos de Industrias y Servicios.

Uno, en representación de las Hermandades Sindicales de Agricultores y Ganaderos.

Uno, designado por las Cajas Generales de Ahorro benéficas, a través del Sindicato correspondiente.

Uno, empleado del Banco de España, con veinte años de servicios, por lo menos, elegido por la Junta Central Social del Sindicato de Banca y Bolsa.

En estos cuatro últimos casos, las normas de elección se dictarán, respectivamente, por los Ministerios de Industria y Comercio y Agricultura los dos primeros, y por el de Trabajo los últimos, oyendo a la Organización sindical; y

Doce, elegidos por los accionistas con arreglo a los Estatutos.

Sólo tendrán voto en el Consejo General los miembros del mismo.

El Presidente tendrá voto decisivo en los casos de empate, y será sustituido, en los de ausencia, vacante o enfermedad, por el Subgobernador, y, a falta de éste, por el Consejero más antiguo de los presentes.

Ningún Consejero del Banco, con excepción de los representantes del Estado, podrá tomar posesión de su cargo sin que su designación haya sido confirmada por Orden expedida por el Ministerio de Hacienda y los representantes de los accionistas, sin tener, además, inscritos a su nombre, en plena propiedad, los extractos de acciones que los Estatutos determinen.

Todos los Consejeros, que habrán de ser españoles, tendrán, salvo los expresamente prevenido en esta Ley, iguales derechos y deberes.

Ningún Consejero podrá realizar ni avalar operaciones de crédito con el Banco, y los representantes del Estado no podrán poseer tampoco acciones del Establecimiento.

Los Consejeros representantes del Estado podrán ser removidos libremente por el Gobierno en cualquier momento. Sus actos no obligarán a la Administración del Estado.

El cargo de Consejero elegido por los accionistas durará cuatro años, pudiendo ser reelegidos los que lo obtengan. La renovación se hará anualmente por cuartas partes.

El Gobernador podrá suspender la ejecución de los acuerdos del Consejo cuando no se ajusten a las leyes, a los Estatutos o al Reglamento. A la Delegación del Gobierno competirá igual facultad respecto de cualquier acuerdo que, a su entender, esté en contradicción con los intereses

generales cuya defensa le corresponda. De estas determinaciones se dará cuenta inmediata al Ministro de Hacienda, para que resuelva lo procedente.

ART. 7.º Las Comisiones serán nombradas por el Consejo y presididas por el Gobernador, por el Subgobernador o por el Consejero más antiguo de los presentes. Se compondrán, en el número que prevengan los Estatutos, de un número igual de Consejeros representantes del Estado, o de éstos y corporativos, de una parte, y de Consejeros representantes de los accionistas, de otra, todos con voz y voto, siendo decisivo el del Presidente en los casos de empate. En todas ellas figurará como Vocal un representante del Estado, por lo menos.

A toda Comisión asistirá uno de los Directores generales, que será el encargado de dar cuenta de los asuntos que se lleven a conocimiento de la misma.

El Gobernador y el Subgobernador podrán asistir con voz y voto a las Comisiones cuando lo estimen conveniente.

La Comisión encargada de conocer y autorizar, en su caso, las operaciones que realice el Banco, se formará con Vocales representantes del Estado y de los accionistas solamente. No podrá concederse ningún crédito contra el voto unánime de los Vocales representantes de los accionistas asistentes.

ART. 8.º La Junta General de Accionistas, constituida con arreglo a los Estatutos, será presidida por el Gobernador. Con él formarán la Mesa los Consejeros del Banco, si bien sólo tendrán voto los representantes de los accionistas.

Los accionistas con derecho de asistencia a la Junta podrán examinar, en el plazo que establezcan los Estatutos, el Balance y las cuentas del ejercicio.

Corresponderá a la Junta general ordinaria de accionistas:

a) Confirmar o rectificar los nombramientos provisionales de Consejeros que, para cubrir las vacantes ocurridas, haya designado una Junta presidida por el Gobernador y compuesta por los Consejeros representantes de los accionistas y un número igual de accionistas asociados, elegidos en la forma que dispongan los Estatutos.

b) Elegir o reelegir, oído el dictamen que sobre este extremo deberá emitir la Junta a que se refiere el apartado anterior, los Consejeros que hayan de ocupar las vacantes de turno.

c) Deliberar sobre la Memoria y el Balance que, después de aprobados por el Consejo, se llevarán a conocimiento de la Junta. Los accionistas, en los turnos reglamentarios, podrán pedir sobre la Memoria y el Balance las aclaraciones, explicaciones y ampliaciones que estimen procedentes, y expresar sus puntos de vista sobre los extremos tratados en aquélla. La Junta podrá adoptar el acuerdo de plantear formalmente su discrepancia, a los efectos prevenidos en el artículo siguiente, con determinados puntos de la Memoria, del Balance o de la gestión, discrepancia que habrá de fundarse, precisamente, en la infracción de disposiciones legales, estatutarias o reglamentarias; y

d) Acordar que sobre los extremos que sean objeto de la Memoria o del Balance se dirija al Consejo, o se eleve al Gobierno, una moción expresiva del criterio o de las aspiraciones de la Junta. Estos acuerdos, así como los comprendidos en la última parte del apartado anterior,

requerirán para ser válidos, además de los requisitos establecidos por los Estatutos para las votaciones en general, alcanzar la mayoría del capital representado en la Junta.

Las Juntas generales extraordinarias no podrán convocarse sin autorización del Ministro de Hacienda, y no podrá tratarse en ellas de más asuntos que los que se hayan comprendido en la autorización y consignado en la convocatoria.

ART. 9.º La Memoria y Balance, después de celebrada la Junta general ordinaria de accionistas, se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda. En el caso de haberse planteado por aquélla la discrepancia a que se alude en el apartado c) del párrafo tercero del artículo anterior, la resolución corresponderá al Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Estado.

ART. 10. La Delegación del Gobierno, presidida por el Gobernador y constituida por el Director general de Banca y Bolsa y los cuatro Consejeros representantes del Estado, conocerá, con la debida antelación, de los asuntos que, habiendo de ser examinados en las reuniones del Consejo y de las Comisiones, revistan especial importancia, a fin de fijar la actitud que en aquellas reuniones haya de mantener. A las sesiones que a este efecto celebre la Delegación del Gobierno asistirán el Subgobernador y los dos Directores generales.

La Delegación del Gobierno ejercerá, cuando proceda, la facultad a que se refiere el párrafo último del artículo 6.º.

ART. 11. Corresponderá al Banco de España la facultad exclusiva de emitir billetes de curso legal, al portador, que ejercerá, como único de emisión, en el territorio nacional y Posesiones españolas.

Los billetes del Banco de España son, preceptivamente, medio legal de pago con pleno poder liberatorio.

La cuantía de cada billete no será inferior a veinticinco pesetas. No obstante, continuará la emisión y puesta en circulación de billetes de una a cinco pesetas, hasta que se establezca, mediante Decreto, el canje de estos billetes por moneda metálica.

El límite que podrá alcanzar la circulación de billetes será fijado por Ley publicada en el *Boletín Oficial del Estado*. El Banco España cuidará de elevar al Gobierno, en tiempo oportuno, la correspondiente propuesta, acompañada de una Memoria en la que se expongan los motivos de aquélla.

El importe de los billetes del Banco de España correspondientes a series retiradas de la circulación, y que no hayan sido presentados o no se presenten al cobro dentro de los siete años siguientes al acuerdo de su retirada, se destinará al fin previsto en el artículo 27. El importe de dichos billetes dejará de figurar en el pasivo del Banco, y éste abonará, con cargo al título nominativo a que el citado artículo se refiere, los que ulteriormente se presenten al cobro.

ART. 12. El Banco podrá, dentro de las normas a que se refiere el artículo 2.º, y ateniéndose a sus Estatutos, descontar y redescantar efectos cuyo vencimiento no exceda de noventa días; descontar cupones y títulos amortizados, y conceder préstamos, tanto con garantía como personales, por plazos que no excedan de noventa días, pudiendo revestir la forma de cuentas corrientes de crédito y renovarse, tácitamente, por

plazos iguales, mientras dure la validez legal de la póliza, así como también sobre conocimientos de embarque y mercancías aseguradas.

Los efectos y pólizas correspondientes a operaciones con los cultivadores directos de la tierra, con destino a la producción agrícola, podrán alcanzar, como plazo máximo de vencimiento, el de doce meses.

El Banco no podrá aceptar hipotecas más que como superposición de garantía de operaciones hechas reglamentariamente y cumpliendo las disposiciones vigentes en la materia. Si en pago de créditos vencidos recibiese acciones u obligaciones de otras Sociedades o bienes muebles o inmuebles, procederá lo antes posible a su enajenación.

ART. 13. El Banco, ajustándose a lo prevenido en este texto y a las demás disposiciones legales y reglamentarias, abrirá cuentas corrientes de efectivo y de valores mobiliarios, especificando en éstas los títulos por clases, serie y numeración; admitirá depósitos y realizará, además, las operaciones de giro en sus varias formas, transferencias, traslado de fondos y valores, cobros y pagos por cuenta ajena y, en general, los servicios propios de la comisión mercantil en asuntos bancarios.

ART. 14. Las tarifas de servicios y comisiones que aplique el Banco de España en sus operaciones directas con el público se ajustarán a las aprobadas por el Ministerio de Hacienda para las operaciones iguales de la Banca en general.

ART. 15. Los Bancos y banqueros que figuren registrados como tales en la Dirección General de Banca y Bolsa y se hallen dentro de las condiciones que fije el Ministerio de Hacienda disfrutarán, sobre los efectos que presenten a redescuento, de una bonificación equivalente a la quinta parte del tipo de interés señalado por el Banco.

Se concederá una bonificación del medio por ciento sobre el tipo de interés a los Bancos y banqueros indicados en el párrafo anterior que presten su aval en los préstamos personales y en los garantizados con valores, con excepción de los que se refieran a títulos del Estado o del Tesoro, a valores de entidades que exploten un monopolio del Estado y a títulos o valores cuyo servicio de interés o amortización se halle garantizado directamente por el Estado.

ART. 16. Las Cajas Generales de Ahorro del Protectorado del Gobierno, las Cajas rurales, las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos, los Sindicatos industriales y las Cofradías de pescadores, constituidos legalmente, y los demás organismos establecidos por leyes especiales que disfruten, por disposición de las mismas, de los beneficios otorgados a los Sindicatos, gozarán también de las bonificaciones a que se refiere el artículo anterior en la cuantía y condiciones previstas en el mismo.

ART. 17. En las operaciones de descuento que efectúe el Banco con particulares, Sociedades o Corporaciones que no disfruten del régimen de bonificación a que se refieren los dos artículos anteriores, las dos terceras partes de la cantidad que, en otro caso, hubiera importado la bonificación con arreglo a dichos artículos se destinarán al fin previsto en el artículo 27.

ART. 18. La Banca privada suministrará al Banco de España la información a que se contrae el artículo 49. El Banco, en sus relaciones con aquélla, atemperará su actuación al mejor cumplimiento de las normas de política crediticia a que se refieren los artículos 2.º y 42.

Considerará también como misión propia, cuando así lo aconseje el interés general, la de ofrecer a las instituciones de crédito que, habiendo acomodado su actuación a las buenas prácticas bancarias, se encuentren, en caso de crisis general o por otras circunstancias, con dificultades de tesorería, el concurso posible dentro de su órbita de acción y compatible con la seguridad de sus operaciones.

ART. 19. El importe de los billetes en circulación, unido a la cantidad constituida por depósitos y saldos de cuentas corrientes de efectivo, y al saldo acreedor, en su caso, de la cuenta de Tesorería, habrá de estar representado en el activo del Balance del Banco:

a) Por el oro y plata del mismo.

b) Por las divisas y saldos a su favor debidos por corresponsales en el Extranjero. El Gobierno podrá fijar un límite a las existencias a que este apartado se refiere.

c) Por las pólizas de préstamo, créditos con garantía estatutaria, descuentos y redescuentos de efectos.

d) Por los valores de la cartera de renta y por los adquiridos o tomados por el Banco con arreglo a los artículos 2.º y 20.

e) Por el título refundido de la deuda del Estado, a que se contrae el artículo 26; por los valores y bienes de cualquier clase en que se halle materializada en su caso la amortización del mismo, con arreglo al artículo 27; por los anticipos hechos al Tesoro y por las operaciones de crédito o de inversión, distintas de las anteriores, efectuadas según la Ley.

ART. 20. El Banco no podrá aumentar, salvo expresa autorización del Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, su actual cartera de renta, constituida por títulos de la Deuda amortizable al cuatro por ciento, y por acciones de Tabacalera, S. A., del Banco de Estado de Marruecos, del Banco Exterior de España y de la Compañía Arrendataria de Tabacos, mientras dure su liquidación.

No obstante, el Banco de España podrá, con ocasión de la emisión de nuevos títulos por parte de los demás Bancos oficiales, adquirir participaciones en el capital de los mismos si para ello obtiene autorización expresa del Consejo de Ministros.

Las acciones que figuren en la cartera de renta no podrán tampoco ser vendidas por el Banco sin autorización expresa del Consejo de Ministros.

ART. 21. Con independencia de la cartera de renta, a que se refiere el artículo anterior, el Banco, ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 2.º, podrá, de cuenta propia, adquirir en el mercado, poseer y enajenar fondos y efectos públicos de renta fija.

Podrá también recibir títulos de la Deuda del Estado o del Tesoro para su negociación. Cuando la cesión se realice en firme y no en mera comisión de colocación, el importe de los títulos se computará a los efectos prevenidos en el artículo siguiente.

ART. 22. El Banco realizará gratuitamente el servicio de tesorería del Estado. El servicio financiero de la Deuda del Estado y del Tesoro y el de mediación en las operaciones estatales de crédito, así como los demás servicios permanentes u ocasionales que preste el Establecimiento al Estado, se regularán por convenios especiales.

Los anticipos al Tesoro público no podrán exceder del doce por ciento

de los créditos anuales autorizados en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de gastos y no devengarán intereses.

Fuera de los casos previstos en este artículo, el Estado sólo podrá utilizar los recursos del Banco para las necesidades públicas por medio de una ley.

ART. 23. Únicamente por ley podrá acordarse la cesión, enajenación, gravamen o traslado al extranjero de las existencias en oro y plata del Banco de España.

Esta limitación cesará en el caso de que por ley se encomiende al Banco de España la regulación del cambio exterior, actualmente a cargo del Instituto Español de Moneda Extranjera.

Si en cualquier evento hubiera de lucir en las cuentas del Banco el importe de la plusvalía del oro o de la plata, dicho importe se destinará al fin previsto en el artículo 27.

ART. 24. La participación del Estado en los beneficios líquidos anuales que obtenga el Banco de España continuará rigiéndose por las normas establecidas en el artículo 8.º de la Ley de 13 de marzo de 1942.

El importe de dicha participación se destinará al fin previsto en el artículo 27.

ART. 25. El Banco podrá solicitar el aumento de su capital hasta la cifra de doscientos cincuenta millones de pesetas. El Gobierno podrá autorizar dicho aumento con los requisitos que establezcan los Estatutos, y siempre de acuerdo con los dos siguientes preceptos:

A) Que se compense al Estado de toda merma que en la aplicación de las normas establecidas en el artículo anterior para el reparto de beneficios pudiera producirse en relación con el valor absoluto que correspondería al capital y reservas actuales, que en todo caso servirán de base para liquidar la distribución de beneficios entre el Estado y el Banco.

B) Que el aumento de capital no implique disminución en los impuestos de carácter general a que esté afecto el Banco de España, en cuanto estos impuestos dependan, para la determinación del tipo aplicable, de la relación entre el capital y reservas, de una parte, y el importe de los beneficios, de otra.

A los efectos de la aplicación de estos preceptos se entenderá que los tipos, así de participación del Estado como de imposición sobre beneficios y dividendos, serán los que habría correspondido aplicar a las cifras absolutas de dichos beneficios y dividendos, supuesto un capital-acciones de ciento setenta y siete millones de pesetas y el importe actual de las reservas expresas.

ART. 26. Se fusionarán en una Deuda especial, incorporándose al título nominativo sin interés, a que se refiere el artículo 7.º de la Ley de 13 de marzo de 1942, el anticipo de ciento cincuenta millones de pesetas que el Banco de España hizo al Tesoro público en virtud del artículo 4.º de la Ley de 14 de julio de 1891; el préstamo de cien millones representado por pagarés procedentes de Ultramar, a que se contrae la Ley de 2 de agosto de 1899; los anticipos a que alude el artículo 4.º de la Ley de 13 de marzo de 1942, y los saldos de las demás cuentas a cargo del Tesoro anteriores a 1 de enero de 1942 y depurados con arreglo a la citada Ley de 13 de marzo de dicho año.

ART. 27. Se destinará precisamente a la amortización de la Deuda especial a que se refiere el artículo anterior el total importe de la participación correspondiente al Estado, según el artículo 24, en los beneficios líquidos anuales que obtenga el Banco de España; el importe, en las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 11, de los billetes correspondientes a series retiradas de la circulación y que no se hayan presentado o se presenten al cobro en los plazos que en el expresado artículo se determinen; el importe de las dos terceras partes a que se refiere el artículo 17, y en el caso aludido en el párrafo 3.º del artículo 23, el importe de la plusvalía del oro y de la plata a que dicho párrafo se contrae.

La amortización se llevará a efecto en la forma y condiciones que establece el artículo 9.º de la Ley de 13 de marzo de 1942.

El importe de la amortización de dicho crédito será materializado en el activo del Balance del Banco, durante los diez primeros años de vigencia de esta Ley, en los bienes, valores o especies que el Ministro de Hacienda disponga. Transcurrido este plazo, la materialización de que se trata será potestativa del Ministro. Los posibles rendimientos o la plusvalía de estos bienes, valores o especies se destinarán en su totalidad, sin pasar, por tanto, a la cuenta del ejercicio del Banco de España, a incrementar el importe de la aludida amortización.

ART. 28. El Banco necesitará autorización del Ministerio de Hacienda para la apertura de nuevas Sucursales y Agencias.

La cantidad fija convenida para el sostenimiento de las Agencias del Banco en el extranjero subsistirá mientras el Gobierno estime conveniente su conservación para los intereses públicos.

ART. 29. El Banco dará a conocer su balance de situación, por lo menos, mensualmente. El correspondiente al final del ejercicio se publicará en el *Boletín Oficial del Estado*.

ART. 30. La aplicación al Banco de España de lo dispuesto en esta Ley y en los nuevos Estatutos y Reglamento que sean aprobados por el Gobierno con arreglo a lo prevenido en el artículo 32 no entrañará solución de continuidad en su contabilidad, ni sustitución de deudor o acreedor en sus débitos y créditos de cualquier clase, ni cambio o modificación de titularidad o dominio en sus bienes y derechos.

ART. 31. Se concede opción a los actuales accionistas del Banco de España para que cedan sus títulos al Estado contra pago de su importe, al precio medio de la cotización oficial de las acciones del Banco durante el quinquenio terminado en 30 de junio de 1946.

Para el cálculo de dicho promedio se tomará como dividendo la suma de las cotizaciones mayor y menor de cada mes del quinquenio publicadas en el *Boletín Oficial de Cotización de la Bolsa de Madrid*, y como divisor, el número de cambios computados.

Los accionistas que deseen hacer uso de este derecho lo solicitarán del Ministro de Hacienda en el plazo de los dos meses siguientes a la publicación de la presente Ley.

Las acciones que por el modo reseñado adquiriera el Estado serán vendidas en Bolsa a medida que lo disponga la Comisión creada por el artículo 10 de la Ley de 23 de febrero de 1940.

El importe de los pagos y cobros a que den lugar las operaciones

ordenadas por este artículo se llevará a la cuenta de la Hacienda pública establecida por el apartado c) del artículo 7.º de dicha Ley. Las diferencias que se produzcan, si fueren en beneficio, acrecerán el excedente que arroje la liquidación de la expresada cuenta, y lo disminuirán en caso contrario.

ART. 32. El Gobernador, con el Consejo General, redactarán y elevarán al Ministro de Hacienda, antes de 1 de julio de 1947, los Estatutos por que haya de regirse el Banco de España. Su aprobación definitiva se hará por Decreto, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros, después de oído el Consejo de Estado.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el régimen de relaciones entre el Banco de España y sus empleados, a efectos de trabajo, se regirá por las normas que dicte el Ministerio de Trabajo, de conformidad con la Ley de 16 de octubre de 1942.

El Consejo General del Banco someterá a la aprobación del Ministro de Hacienda, antes de finalizar el próximo año, el proyecto de Reglamento general.

Salvo especial disposición legislativa, las reformas sucesivas de los Estatutos habrán de hacerse, oído el Consejo de Estado, mediante Decreto, y a propuesta del Consejo del Banco, adoptada por los dos tercios de sus componentes.

Mientras no sean aprobados los nuevos Estatutos y el Reglamento general, regirán los actuales en cuanto no se hallen modificados por la presente Ley, y en lo que respecta al Reglamento general, por los Estatutos que se dicten.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LOS OTROS BANCOS OFICIALES

ART. 33. Los otros Bancos oficiales se regirán por las disposiciones especialmente dictadas en relación con ellos y por sus Estatutos y Reglamentos, debidamente aprobados. No les serán de aplicación los preceptos del título II de esta Ley ni los que se refieran, en general, al régimen de la Banca privada. Dependerán del Ministerio de Hacienda.

ART. 34. Corresponderá al Ministerio de Hacienda, en lo que a dichos Bancos se refiere, aprobar o señalar los tipos de interés en sus operaciones activas y pasivas, así como las tarifas de servicios y comisiones, salvo las que estén establecidas por Estatutos; aprobar o reducir los dividendos activos propuestos por las Juntas generales o los Consejos de Administración, y resolver sobre la apertura de nuevas Sucursales o cierre de las ya existentes.

Las tarifas de servicios y comisiones en las operaciones que no sean privativas de los Bancos oficiales, y que éstos realicen en concurrencia con la Banca privada, se ajustarán a las aprobadas por el Ministerio de Hacienda para esta última.

ART. 35. Subsistirá el cargo de Comisario de la Banca oficial, con

las funciones y atribuciones que se señalan en los Decretos de 13 de marzo de 1938 y 1 de agosto de 1941.

En todos los Bancos oficiales, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, corresponderá al Comisario de la Banca oficial:

a) Asumir la Jefatura superior de la Administración del Establecimiento con el título de Gobernador, pudiendo delegar parcialmente sus atribuciones en los Subgobernadores, Subcomisarios o Directores-Gerentes, en la forma que prevengan los respectivos Estatutos.

b) Ostentar la representación más calificada del Estado en el Banco, y en tal concepto, presidir la Delegación del Gobierno cuando ésta exista con carácter orgánico en el Establecimiento respectivo.

c) Presidir el Consejo de Administración del Banco y las Juntas generales de Accionistas.

A propuesta del Ministro de Hacienda, el Gobierno podrá nombrar Gobernadores especiales para los Bancos Hipotecario, Exterior, de Crédito Industrial y de Crédito Local de España, que tendrán en tal caso las facultades que esta Ley atribuye al Comisario y las que a dichos cargos correspondan con arreglo a los Estatutos de cada Establecimiento. Las personas designadas para los indicados cargos estarán jerárquicamente subordinadas al Comisario de la Banca oficial, al cual incumbirá principalmente mantener la unidad de actuación de la Banca oficial con arreglo a las directrices del Gobierno.

El Comisario de la Banca oficial, con los Consejos de los Bancos respectivos, redactará y elevará, para su aprobación, al Ministro de Hacienda, antes del 1 de julio de 1947, los proyectos de la reforma que, en cumplimiento de los preceptos de esta Ley, deba introducirse, en su caso, en los Estatutos de los Bancos oficiales a que la presente sección se refiere.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el régimen de relaciones entre los Bancos oficiales y sus empleados, a efectos de trabajo, se regirá por las normas que dicte el Ministerio de Trabajo, de conformidad con la Ley de 16 de octubre de 1942.

ART. 36. También podrá el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, fijar un límite a la remuneración de los Consejeros de los Bancos oficiales por los conceptos de retribución regular fija y participación en los beneficios. El Ministro de Hacienda, al hacer uso de esta facultad, determinará el destino que haya de darse, en su caso, al sobrante de la participación estatutaria.

Los nombramientos de Consejeros representantes de accionistas habrán de ser aprobados por el Ministro de Hacienda, y todos los nuevos Consejeros que se designen deberán ostentar la nacionalidad española.

TÍTULO II

De la Banca privada.

ART. 37. Ejercen el comercio de Banca las personas naturales o jurídicas que, con habitualidad y ánimo de lucro, reciben del público, en forma de depósito irregular o en otras análogas, fondos que aplican por cuenta propia a operaciones activas de crédito y a otras inversiones, con arreglo a las Leyes y a los usos mercantiles, prestando, además, por regla general, a su clientela servicios de giro, transferencia, custodia, mediación y otros, en relación con los anteriores, propios de la comisión mercantil.

ART. 38. Nadie podrá ejercer el comercio de Banca ni usar la denominación de «Banco» o «Banquero» sin figurar inscrito en el Registro de Bancos y Banqueros, que estará a cargo de la Dirección General de Banca y Bolsa. Figurarán en dicho Registro:

a) Los que ostentando la condición de Banco o Banquero con anterioridad a la vigencia del Real decreto de 25 de mayo de 1926, y habiendo ejercido desde entonces la profesión bancaria, obtengan la previa autorización del Ministro de Hacienda, que habrán de solicitar antes de 1 de julio de 1947.

b) Los que con posterioridad a la vigencia del mencionado Real decreto hayan obtenido la debida autorización para usar la denominación de «Banco» o «Banquero», y hayan venido ejerciendo la profesión bancaria desde que obtuvieron aquella autorización; y

c) Los que en adelante obtengan del Gobierno, previo informe del Consejo Superior Bancario, la expresada autorización.

También podrán obtener la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros aquellos establecimientos que, ejerciendo de hecho la función bancaria en territorio español con anterioridad al 18 de julio de 1936, continúen en dicho ejercicio y merezcan, por su actuación correcta, a juicio del Consejo Superior Bancario, la inclusión en el aludido Registro.

Sólo por excepción, y tratándose de casos justificados y notorios, podrá autorizar el Gobierno que una determinada entidad que viniera usando con anterioridad al aludido Real decreto la denominación de «Banco» o «Banquero» sin realizar efectivamente operaciones bancarias, continúe usando tal denominación sin figurar en el Registro de Bancos y Banqueros.

ART. 39. Serán dados de baja en el Registro de Bancos y Banqueros:

a) Los que dejen transcurrir un año, a contar desde el día siguiente al de la fecha de la notificación del acuerdo de autorización, sin haber dado comienzo realmente a sus actividades bancarias; y

b) Los que interrumpan de hecho sus actividades profesionales por tiempo superior a un año.

Los que hayan sido dados de baja con arreglo a los dos apartados

anteriores, no podrán nuevamente ser dados de alta sin obtener del Gobierno la autorización correspondiente.

ART. 40. La disciplina bancaria que establecen las Leyes españolas se aplicará asimismo a las oficinas bancarias extranjeras establecidas en el territorio español.

El Gobierno condicionará el ejercicio de las actividades de estos Bancos al principio de reciprocidad con sus países respectivos, y podrá exigir, además, la prestación de una garantía constituida en depósitos en efectivo o en efectos públicos, que fijará discrecionalmente.

Asimismo requerirá la previa autorización del Gobierno la cesión o traspaso a Bancos o Banqueros españoles de negocios bancarios extranjeros.

La Dirección General de Banca y Bolsa dedicará a los Bancos y Banqueros extranjeros operantes en España una Sección especial del Registro a que se refiere el artículo 38.

ART. 41. Cuando el negocio de Banca se ejerza por una persona social, ésta habrá de constituirse bajo la forma de Sociedad regular colectiva, comanditaria simple o por acciones, anónima o de responsabilidad limitada, con arreglo al Código de Comercio y a los usos mercantiles.

ART. 42. Las normas generales de la política del crédito serán dictadas por el Ministro de Hacienda, previo acuerdo del Consejo de Ministros.

ART. 43. Corresponderá al Ministro de Hacienda, previo informe del Consejo Superior Bancario:

a) Señalar el tipo máximo de interés abonable a las cuentas corrientes, imposiciones y demás operaciones similares.

b) Fijar los tipos de interés y comisiones mínimos en las operaciones activas y las condiciones de su aplicación. No obstante, podrán autorizarse variaciones en los tipos y condiciones en determinadas plazas cuando así lo aconsejen circunstancias especiales.

La fijación por el Ministerio de Hacienda de los tipos de interés a que se refieren los dos apartados anteriores requerirá también informe previo del Consejo de la Economía Nacional.

c) Disponer la forma en que deben establecerse y publicarse los balances y los extractos de las cuentas de pérdidas y ganancias de los Bancos y Banqueros operantes en España.

d) Dictar normas generales de carácter obligatorio sobre el reparto de dividendos activos bancarios.

e) Disponer la creación de Cámaras de Compensación.

ART. 44. El Ministro de Hacienda, previo informe del Consejo Superior Bancario, estará facultado:

a) Para fijar el capital mínimo con que ha de contar cada Banco o Banquero en relación con la plaza o plazas donde opere.

b) Para exigir con carácter general el mantenimiento de una determinada proporción entre el importe de los recursos propios de los Bancos y el conjunto de sus obligaciones, y para establecer asimismo la proporcionalidad máxima que hayan de guardar los créditos personales con el importe de los demás que formen el activo de cada establecimiento. En las normas que al efecto se dicten podrán establecerse distintas categorías, con arreglo al volumen de operaciones, naturaleza y peculiaridades de los Bancos y Banqueros.

c) Para determinar la relación que debe haber entre el activo realizable y las obligaciones exigibles.

d) Para fijar el límite superior de los saldos de determinadas cuentas acreedoras a plazo.

ART. 45. Se requerirá la autorización del Ministro de Hacienda, previo informe del Consejo Superior Bancario:

a) Para modificar la forma en que se hallen constituidas las Empresas bancarias individuales y colectivas.

b) Para las ampliaciones de capital y la puesta en circulación de acciones de las Compañías bancarias.

c) Para los acuerdos entre firmas bancarias sobre traspaso de oficinas, absorciones y fusiones, así como para la adquisición de títulos representativos del capital de otras Empresas bancarias, cuando esta adquisición lleve de hecho anexo el control de las mismas.

d) Para el reparto parcial o total en efectivo de los fondos de reserva de las Compañías bancarias.

ART. 46. El Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y previo informe favorable del Consejo Superior Bancario, estará facultado para ordenar a un determinado Banco o Banquero que deposite en el Banco de España el porcentaje de sus recursos ajenos que le fije, con la limitación del 20 por 100 de los mismos. El depósito habrá de hacerse en efectivo o en valores libres.

ART. 47. Corresponderá a la Dirección General de Banca y Bolsa:

a) Formular a un Banco o Banquero indicaciones especiales sobre la política de crédito que practique y que no se refieran, salvo cuando la Ley lo autorice, a operaciones concretas.

b) Llamar la atención de los Consejos de Administración y Directores de las Sociedades bancarias cuando estime que la política de dividendos que practiquen, sin incumplir las normas obligatorias sobre la materia, no se acomoda a los resultados efectivos de la explotación y a la situación y perspectiva de sus negocios. Si la entidad interesada desoyera la advertencia, el Ministro de Hacienda, a propuesta de la expresada Dirección, podrá disponer que la aludida indicación sea inserta en la Memoria que se presente a la aprobación de la primera Junta general de socios que se celebre.

c) Disponer reservadamente inspecciones ocasionales de un Banco o Banquero en la forma que en la resolución se especifique, utilizando al efecto personal de la propia Dirección o del Banco de España.

d) Cuidar del fiel cumplimiento por los Bancos y Banqueros de las normas generales de la política de crédito.

e) Cumplir y hacer cumplir las órdenes y acuerdos emanados del Ministro de Hacienda.

f) Ordenar, en su caso, la formación de expedientes e imponer las sanciones que procedan, dentro de su competencia, con arreglo a los artículos 56 y 57.

ART. 48. Los Bancos y Banqueros operantes en España necesitarán la previa autorización de la Dirección General de Banca y Bolsa para realizar suscripciones, compras, canjes o adquisiciones en general de acciones o participaciones en el capital social de otros Bancos o Banqueros españoles.

La precedente obligación se extenderá a los casos en que el adquirente sea una Sociedad mercantil u otra persona jurídica, que, por precepto estatutario o contractual, por tenencia de importantes cantidades de acciones o por convenio de sindicación, dependa de hecho en su administración de Bancos y Banqueros operantes en España o sea declaradamente filial de alguno o algunos de ellos. En caso de discrepancia sobre la cuestión de hecho de la dependencia o no de una entidad respecto de otra bancaria, el Ministro de Hacienda, previos los asesoramientos e informes que entienda procedentes, resolverá discrecionalmente.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el apartado c) del artículo 45.

ART. 49. Los Bancos y Banqueros estarán obligados a facilitar a la Dirección General de Banca y Bolsa los datos y antecedentes que no afectando a operaciones, actos o negocios determinados, les reclame aquélla, sin perjuicio de las facultades que a dicho Centro correspondan para acordar la práctica, cuando proceda, de inspecciones ocasionales, con arreglo al apartado c) del artículo 47.

Estarán también obligados a remitir, en los plazos que se establezcan, sus balances y el extracto de su cuenta de pérdidas y ganancias a dicha Dirección, al Banco de España y al Consejo Superior Bancario.

ART. 50. Se declara extinguido el Comité Central de la Banca Española. En su lugar, y como continuación del mismo en cuanto se refiere a su organización administrativa y patrimonio, se crea el Consejo Superior Bancario.

El Consejo Superior Bancario constituirá el órgano consultivo del Ministerio de Hacienda en las materias de Banca.

El Consejo Superior Bancario será presidido por el Director general de Banca y Bolsa, y estará constituido por los Vocales siguientes:

El Subgobernador del Banco de España, como Vicepresidente.

El Jefe del Sindicato Nacional de Banca y Bolsa.

Un Vocal designado por los demás Bancos oficiales.

Cinco elegidos por los Bancos que la Dirección General de Banca y Bolsa incluya, a estos efectos, en el grupo de nacionales.

Tres elegidos por los Bancos que la Dirección General de Banca y Bolsa incluya, a estos efectos, en el grupo de regionales.

Dos elegidos por los Bancos y Banqueros que la Dirección General de Banca y Bolsa incluya, a estos efectos, en el grupo de locales.

Dos elegidos por la Junta Social central del Sindicato Nacional de Banca y Bolsa, y que habrán de pertenecer al escalafón de alguna Empresa bancaria con la categoría de funcionarios técnicos.

Los Vocales representantes de los Bancos se elegirán, conforme a las disposiciones que el Ministerio de Hacienda dicte, por los Bancos y Banqueros con derecho a tal designación en el seno de las Juntas Económicas del Sindicato Nacional de Banca y Bolsa.

La Dirección General de Banca y Bolsa efectuará discrecionalmente la precedente clasificación, atendiendo, en relación con cada establecimiento, al número y extensión geográfica de sus sucursales, a la importancia de sus depósitos y negocios y a la cuantía de sus recursos propios.

Los miembros del Consejo Superior Bancario, excepto su Presidente,

el representante del Banco de España y el Jefe del Sindicato Nacional de Banca y Bolsa, serán renovados anualmente por mitad, pudiendo ser reelegidos. Todos los designados deberán ser de nacionalidad española.

Los acuerdos, dentro del Consejo Superior Bancario, se tomarán por mayoría de votos de sus miembros presentes, excepto el Presidente, que no tendrá voto.

La adscripción de la Banca privada al Consejo Superior Bancario es obligatoria, incluso la de los Bancos extranjeros establecidos en España, los cuales, sin embargo, no tendrán voto en las elecciones para los cargos de dicho Consejo.

ART. 51. Sin perjuicio de las facultades del Ministro de Hacienda y de la Dirección General de Banca y Bolsa, corresponderá al Consejo Superior Bancario:

1.º Formar la estadística bancaria española y la de la Banca extranjera establecida en España.

2.º Interpretar las normas dictadas por el Ministerio de Hacienda sobre tarifas de los servicios bancarios y vigilar su exacto cumplimiento, informando a la Dirección General de Banca y Bolsa de las infracciones o anomalías observadas.

3.º Designar los dos Consejeros para el Banco de España a que se refiere el artículo 6.º de esta Ley.

4.º Servir ordinariamente de órgano de enlace entre el Ministerio de Hacienda y los Bancos y Banqueros, trasladando a éstos las normas, acuerdos o recomendaciones que aquel Departamento le comunique.

5.º Elevar a los Ministerios correspondientes las peticiones, informes y mociones de la Banca privada relativas a cuestiones de carácter general.

6.º Formar y aprobar sus presupuestos y cuentas anuales y administrar sus fondos.

7.º Informar al Ministerio de Hacienda sobre las materias propias de su competencia, por iniciativa propia o a petición de aquél. De un modo especial, el Consejo Superior Bancario informará al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Banca y Bolsa sobre las materias siguientes: reformas en la legislación bancaria, en las normas de actuación de observancia obligatoria y en los tipos máximos o mínimos de interés y de descuento en las diversas operaciones; concurrencia de los caracteres de derecho y de hecho en un determinado Banco; importancia de las plazas mercantiles y pueblos en donde se solicite la instalación de nuevas oficinas bancarias; modificación de las tarifas bancarias; presentación y publicación de los Balances de los Bancos; normas generales de distribución de dividendos activos en las entidades bancarias; regulación de las diversas operaciones bancarias activas y pasivas y de los servicios, y, en general, en los asuntos de interés o responsabilidad para la Banca operante en España o que en tal sentido proponga el Sindicato correspondiente.

ART. 52. Para atender a los gastos que implique el funcionamiento del Consejo Superior Bancario, contribuirán los Bancos y Banqueros privados con un arbitrio anual que fijará el propio Consejo, y que no podrá exceder de un cuarto por mil sobre el capital suscrito y reservas de los Bancos o sobre el capital que los Banqueros tengan computado como afecto a su negocio bancario.

Este arbitrio será administrado libremente por el Consejo Superior Bancario, y no conferirá derecho alguno sobre el patrimonio del mismo en caso de que un Banco o Banquero cese en sus operaciones.

ART. 53. Las Sociedades bancarias privadas que obtengan en el ejercicio social beneficios líquidos superiores al 4 por 100 del importe del capital desembolsado, más las reservas, vendrán obligadas a deducir de los expresados beneficios el 10 por 100, como mínimo, hasta constituir una reserva que alcance la mitad del capital suscrito.

La reserva que para las Sociedades en general ordenó constituir la Ley de 19 de septiembre de 1942 se entenderá, para la Banca privada, comprendida en la establecida por este artículo.

ART. 54. Toda la Banca española ajustará el ejercicio económico al año natural.

Las acciones de los Bancos que estén constituidos bajo la forma de Sociedades anónimas o comanditarias por acciones deberán ser nominativas.

La reforma de los Estatutos de los Bancos en que sea necesario hacerlo por consecuencia de lo establecido en este artículo, deberá realizarse y hallarse implantada antes de 1 de enero de 1948.

ART. 55. Las disposiciones dictadas para las Sociedades mercantiles en general serán de aplicación a los Bancos en cuanto no se opongan a lo prevenido en esta Ley y en los demás preceptos especiales por que se rijan.

ART. 56. Será sancionable el incumplimiento por los Bancos y Banqueros de las disposiciones relativas a los siguientes extremos:

- a) Reparto de dividendos activos.
- b) Apertura de oficinas bancarias.
- c) Abonos o provisiones a los fondos de reserva.
- d) Remisión del balance y resúmenes de resultados a los organismos que corresponda, y sobre confección o formato de dichos documentos.
- e) Aplicación de tipos de interés, máximos o mínimos, o de tarifas de servicios ordenados por el Ministerio de Hacienda.
- f) Cualquier otro extremo regulado por normas de observancia obligatoria.

ART. 57. Las sanciones aplicables serán:

- 1.^a Advertencia.
- 2.^a Amonestación privada.
- 3.^a Amonestación comunicada a toda la Banca.
- 4.^a Multa:
 - a) Por cantidad fija, hasta 150.000 pesetas.
 - b) Por cantidad proporcionada a la infracción, cuando ésta tenga base cifrable, y hasta el 20 por 100 de ella.
- 5.^a Suspensión por un plazo máximo de un año de las ventajas que conceden las disposiciones vigentes a los Bancos y Banqueros en sus relaciones con el Banco de España.
- 6.^a Suspensión de los elementos directivos en sus funciones con o sin nombramiento de administrador o administradores provisionales, cuando se haya producido reincidencia en la misma falta de carácter grave.

7.^a Exclusión del Registro de Bancos operantes en España, liquidación y disolución de la entidad sancionada.

No podrá imponerse sanción alguna, salvo la de advertencia, sin previa instrucción de expediente por la Dirección General de Banca y Bolsa, con audiencia del interesado.

La mitad de las multas se pagará en papel de pagos al Estado. La otra mitad se abonará a la Caja de pensiones de jubilación, viudedad y orfandad de empleados bancarios de la entidad de que se trate, si estuviera especialmente constituida, y en otro caso, a la Mutualidad o Montepío General de la Banca Privada. Si no estuviere constituida ninguna de las dos, se hará efectiva la multa en su totalidad en papel de pagos al Estado.

La competencia para la imposición de estas sanciones radicará: respecto de las dos primeras, en la Dirección General de Banca y Bolsa; respecto de la 3.^a, 4.^a y 5.^a, en el Ministro de Hacienda, a propuesta de dicha Dirección, previo informe del Consejo Superior Bancario, y respecto de la 6.^a y 7.^a, en el Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, previo informe de la misma Dirección y del Consejo Superior Bancario.

ART. 58. La Dirección General de Banca y Bolsa, de oficio o a solicitud del Consejo Superior Bancario, y previa la instrucción de expediente con audiencia del interesado, estará facultada para requerir a cualquier Empresa, individual o colectiva, que use indebidamente la denominación de «Banco» o «Banquero», o que, sin contar con la necesaria autorización legal, admita del público depósitos en efectivo, imposiciones o cuentas corrientes, para que deje de usar aquella denominación o cese en tales operaciones. En caso de resistencia a cumplir lo ordenado, se remitirán las actuaciones por la Dirección General de Banca y Bolsa a la de lo Contencioso del Estado, por si hubiera lugar a pasar el tanto de culpa a los Tribunales de Justicia por desobediencia grave a la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

ART. 59. Los Bancos y Banqueros inscritos en el Registro a que se refiere el artículo 38 participarán en las facilidades y beneficios concertados o que se concierten con el Estado respecto al cheque cruzado y al de viaje y en relación con el Impuesto del Timbre sobre cheques, talones y entregas.

Continuará autorizado el Gobierno para eximir del Timbre del Estado los cheques y demás mandatos de pago a que se refiere el artículo 541 del Código de Comercio, cuando fuesen cruzados en la forma prescrita en el párrafo 1.º de dicho artículo, y para exceptuar de dicho impuesto al acto en cuya virtud, en la aceptación de las letras de cambio, se indique algún Banco o Banquero como pagador del documento, siempre que el pago se realice mediante compensación, con sujeción estricta a las normas establecidas. El signo y la fórmula que expresen haberse efectuado la compensación sustituirá legalmente al «recibí» y a la firma prescrita en el párrafo 2.º del artículo 539 del citado Código.

ART. 60. Por Decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, se dictará el Reglamento para el desenvolvimiento y aplicación del presente título.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.^a Serán amortizadas todas las vacantes que ocurran de Consejeros representantes de los accionistas en el Banco de España, hasta que su número quede reducido a los doce que establece el artículo 6.º de esta Ley. No obstante, los actuales Consejeros, al término de su mandato, podrán ser reelegidos por la Junta general una o más veces, aunque excedan en total del expresado número.

2.^a Continuarán aplicándose las disposiciones vigentes sobre prohibición de constitución de nuevas entidades bancarias y sobre la apertura de sus Sucursales o Agencias.

La modificación o derogación del régimen establecido sólo podrá efectuarse por Decreto acordado en Consejo de Ministros.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ley empezará a regir el 1 de enero de 1947, quedando derogadas a partir de dicho día la Ley de Ordenación Bancaria de 29 de diciembre de 1921, refundida en 24 de enero de 1927, con las modificaciones introducidas por la de 26 de noviembre de 1931, y cuantas disposiciones se opongan al presente texto.

Dada en El Pardo, a 31 de diciembre de 1946.

FRANCISCO FRANCO.

DECRETO DE 31 de diciembre de 1946 por el que se establecen determinadas normas de derecho transitorio en relación con la Ley de Ordenación Bancaria de la misma fecha.

La Ley de Ordenación Bancaria, fecha de hoy, introduce, por lo que respecta al Banco emisor, determinadas modificaciones en relación con el estado de derecho que ha venido rigiendo hasta fines de este año. La propia Ley determina que, en el plazo de seis meses, la expresada Institución habrá de someter al Gobierno el correspondiente proyecto de Estatutos y que, mientras éstos no sean aprobados, continuarán rigiendo los antiguos, en cuanto no se opongan a los preceptos de la nueva Ley.

Es necesario, sin embargo, dictar sin tardanza unas normas, de carácter provisional o transitorio, que aseguren la puesta en vigor de aquellos preceptos legales de inmediato cumplimiento, así como también las que se refieren a la provisión de los nuevos cargos en el espacio de tiempo que forzosamente ha de mediar entre la cesación de la antigua regulación y el pleno funcionamiento de la nueva,

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda,

D I S P O N G O :

ARTÍCULO 1.º En tanto no sea nombrado el Subgobernador del Banco de España, a que se refiere el artículo 4.º de la Ley de Ordenación Bancaria de esta fecha, continuarán los Adjuntos técnicos y los actuales Subgobernadores despachando los asuntos de gestión y régimen interior del Establecimiento.

Una vez nombrado el Subgobernador y en tanto no lo fueren los dos Directores generales del Banco, a que se refiere el artículo 5.º de la mencionada Ley, el Gobernador del Banco de España designará, entre los Jefes de las oficinas del Establecimiento, los que interinamente hayan de desempeñar las funciones asignadas a aquéllos.

ART. 2.º Tendrán plena validez los acuerdos tomados por el Consejo General del Banco, constituido por el Gobernador y los demás miembros actuales del Consejo que también lo sean con arreglo a la Ley de Ordenación Bancaria. Los nuevos Consejeros corporativos a que se refiere el artículo 6.º de dicha Ley, se incorporarán a las funciones del Consejo a medida que sean nombrados.

Se estimará que el actual Consejero representante de los Bancos y Banqueros representa, a partir de la fecha de publicación de este Decreto, al Consejo Superior Bancario. En la primera reunión que celebre dicho Consejo Superior habrá de confirmar en el cargo a su aludido representante o designar, en otro caso, al que lo haya de ocupar.

Se estimará asimismo que el actual Consejero representante de los intereses agrícolas representa, a partir de 1 de enero de 1947, a las Hermandades de Labradores, hasta que sea confirmado o sustituido en su

cargo con arreglo a las normas que han de dictarse por el Ministerio de Agricultura, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6.º de la Ley.

ART. 3.º En el plazo de ocho días hábiles, la Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid comunicará al Ministerio de Hacienda los elementos numéricos y el resultado del cálculo del valor de la acción del Banco de España a que se refiere el artículo 31 de la Ley. El Ministerio de Hacienda, previo informe del Consejo General del Banco, que se contraerá exclusivamente al cálculo de la aludida cifra de valoración, publicará en el *Boletín Oficial del Estado* una Orden ministerial para el debido cumplimiento de dicho precepto, en la cual se establecerá la forma en que ha de ejercitarse la opción y el precio de las acciones.

Las acciones que, con arreglo a lo previsto en la indicada Ley, adquiera el Estado, tendrán los mismos derechos y obligaciones, consignados en las Leyes y Estatutos, que las demás en circulación; se inscribirán en el Registro de acciones del Banco de España con el siguiente título: «Estado Español. Acciones adquiridas a virtud del artículo 31 de la Ley de Ordenación Bancaria», y las transmisiones de propiedad serán intervenidas por Agente de Cambio y Bolsa o Corredor de Comercio colegiado.

ART. 4.º El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 1947.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo, a 31 de diciembre de 1946.

FRANCISCO FRANCO.

El Ministro de Hacienda,
JOAQUÍN BENJUMEA BURÍN.

ADMINISTRACION Y CONSEJO GENERAL
DEL
BANCO DE ESPAÑA

GOBERNADOR, COMISARIO DE LA BANCA OFICIAL

Excmo. Sr. D. Antonio Goicoechea y Cosculluela.

SUBGOBERNADOR

Excmo. Sr. D. Luis Sáez de Ibarra y Sáez de Urabáin.

DIRECTOR GENERAL DE BANCA Y BOLSA

Sr. D.

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS INTERESES
GENERALES DE LA ECONOMIA NACIONAL

Excmo. Sr. D. Francisco de Cárdenas y de la Torre.

Excmo. Sr. D. Luis Olariaga y Pujana.

Excmo. Sr. D. José María Zumalacarregui Prat.

Ilmo. Sr. D. Luis Sancho Seral.

CONSEJERO REPRESENTANTE DE LOS BANCOS OFICIALES

Sr. D.

CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL CONSEJO SUPERIOR
BANCARIO

Excmo. Sr. D. Pedro Barrié de la Maza.

Sr. D.

CONSEJERO REPRESENTANTE DEL CONSEJO SUPERIOR
DE LAS CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION

Excmo. Sr. D. Carlos Prast y Rodríguez de Llano.

CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS JUNTAS CENTRALES
ECONOMICAS DE LOS SINDICATOS DE INDUSTRIA Y SERVICIOS

Sr. D.

CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS HERMANDADES
SINDICALES DE AGRICULTORES Y GANADEROS

Excmo. Sr. D. José Mora de Figueroa y Gómez Imaz, Marqués de
Tamarón.

CONSEJERO REPRESENTANTE DE LAS CAJAS GENERALES
DE AHORRO BENEFICAS

Excmo. Sr. D. Buenaventura José Castro Rial.

CONSEJERO REPRESENTANTE DE LA JUNTA CENTRAL SOCIAL
DEL SINDICATO DE BANCA Y BOLSA

Sr. D.

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS SEÑORES
ACCIONISTAS

- Excmo. Sr. D. Luis de Urquijo y Ussía, Marqués de Amurrio.
Excmo. Sr. D. Juan Antonio de Gamazo y Abarca, Conde de Gamazo.
Excmo. Sr. D. Francisco Aritio y Gómez.
Excmo. Sr. D. Ramón del Rivero y Miranda, Conde de Limpias.
Excmo. Sr. D. Jacobo Stuart y Falcó, Duque de Berwick y de Alba.
Excmo. Sr. D. Ignacio Herrero y de Collantes, Marqués de Aledo.
Excmo. Sr. D. Alfonso Martos y Arizcun, Conde de Heredia-Spínola.
Excmo. Sr. D. Fernando Suárez de Tangil y de Angulo, Conde de Val-
lellano.
Excmo. Sr. D. Alfonso Pidal y Chico de Guzmán, Marqués de Pidal.
Excmo. Sr. D. Lorenzo Martínez Fresneda y Jouve.
Excmo. Sr. D. Francisco Díez de Rivera y Casares, Marqués de Llanzol.
Excmo. Sr. D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza, Conde de
San Luis.
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes.
Ilmo. Sr. D. José Alvarez Guerra y Gutiérrez.
Excmo. Sr. D. José Rivera y Urtiaga, Marqués de San Nicolás de Nora.

DIRECTORES GENERALES

Ilmo. Sr. D. Vicente Barba Farrugia.
Ilmo. Sr. D. Federico Carracedo Burgaz.

SECRETARIO GENERAL

Excmo. Sr. D. Alberto de Alcocer y Ribacoba.

DIRECTOR JEFE DE LAS SUCURSALES

Sr. D.

INTERVENTOR JEFE DE LA CONTABILIDAD

Sr. D. Antonio Victoriano Martín y Martín.

CAJERO DE METALICO

Sr. D.

CAJERO DE VALORES

Sr. D. Antonio García Victoria.

JEFE DE OPERACIONES

Sr. D.

ASESOR JEFE

Sr. D. Francisco Soler Pérez.

ADMINISTRACIONES Y CONSEJOS DE LAS SUCURSALES

ALBACETE

Director: Sr. D. Emilio de Arriaga y Estrada. — *Consejeros:* Señor D. Tadeó Sempere Matarredona y Sr. D. Juan López Jiménez. — *Interventor:* D. Alfonso Sabater Andrés. — *Cajero:* D. Antonio López-Salazar y Gómez. — *Secretario:* D. Lamberto Frías y Martínez.

ALCOY

Director: Sr. D. Antonio Pariente Suárez. — *Consejeros:* Sr. D. Rafael Silvestre Abad y Sr. D. José Ferrándiz Belda. — *Interventor:* Don Alfonso Carbonell Miralles. — *Cajero:* D. Octavio Terol y Pérez. — *Secretario:* D.

ALGECIRAS

Director: Sr. D. José Serra Sánchez. — *Consejeros:* Sr. D. José Valdés Otero y Sr. D. Joaquín Bianchi Santacana. — *Interventor:* D. Mariano Gil de Bernabé y Lorón. — *Cajero:* D. Manuel Tejedor López. — *Secretario:* D. Eduardo Shelly Castrillón.

ALICANTE

Director: Sr. D. Aurelio Botella Torremocha. — *Consejeros:* Señor D. Plácido Gras Boix, Sr. D. Juan Martínez Blanquer, Excmo. Sr. Don Antonio Badías Aznar, Marqués de Ezenarro, y D. Javier Leach Ausó. *Interventor:* D. José María Castaño Gallostra. — *Cajero:* D. Isaac Marchante y López. — *Secretario:* D. Juan Alemany Carsi.

ALMERIA

Director: Sr. D. José Cappa González. — *Consejeros:* Sr. D. Andrés Cassinello García, Sr. D. José López Quesada y Sr. D. Emilio Pérez Manzuco. — *Interventor:* D. Antonio Terriza de Coca. — *Cajero:* Don Gonzalo Batalla González. — *Secretario:* D. Francisco Valverde Pedriacci.

ANTEQUERA

Director: Sr. D. Eustaquio Moisés Castillo Vicuña. — *Consejeros:* Ilmo. Sr. D. José García Berdoy y Excmo. Sr. D. Juan de Lora y Estrada, Conde de Colchado. — *Interventor:* D. Leopoldo Domínguez Galán. — *Cajero:* D. Luis Clavo Grande. — *Secretario:* D. Alejandro Aranaz Lorca.

AVILA

Director: Sr. D. José Luis Fernández Moreno. — *Consejeros:* Señor D. Jesús Rodríguez Palomo y Sr. D. Francisco Ramírez Bernaldo de Quirós. — *Interventor:* D. Isidro Docampo Fraga. — *Cajero:* D. Antonio Manzanares Jiménez. — *Secretario:* D. Francisco de Tapia Núñez.

BADAJOS

Director: Sr. D. Alfonso Sedeño de Oro. — *Consejeros:* Sr. D. Antonio Alvarez Sánchez, Sr. D. Leopoldo Castillo Pozo y Sr. D. Víctor Ramallo Thomas. — *Interventor:* D. Manuel Hernández Castañón. — *Cajero:* D. Antonio Cerro y Sánchez-Herrera. — *Secretario:* D. Adrián Berbén Pérez.

BARCELONA

Director: Sr. D. Alberto Ramírez Orchells. — *Segundo Jefe:* Señor D. Federico Zubeldia Aranguren. — *Consejeros:* Sr. D. Santiago Trías y Ruméu, Sr. D. Eduardo Conde y Gómez del Olmo, Excmo. Sr. D. Miguel Matéu Pla, Excmo. Sr. D. Juan Claudio Güell Churruca, Conde de Ruiseñada; Sr. D. Antonio Miracle Mercader y Sr. D. José Torra Closa. *Interventor:* D. Sergio de Luna Alsina. — *Segundo Jefe de la Intervención:* D. Angel Olarte y Porcal. — *Cajero de Metálico:* D. Ricardo Montejó y Orozco. — *Cajero de Valores:* D. Ramón Pardiñas Trujillo. — *Secretario:* D. Jesús Vizcaíno Fábregues.

BILBAO

Director: Sr. D. Juan Valcárcel-Ríos y García de Vior. — *Consejeros:* Sr. D. Emilio Vallejo Arana, Sr. D. Enrique Aresti y Ortiz, Señor D. Joaquín Antuña-Montoto, Sr. D. Juan María de Goyarrola y Aldecoa, Sr. D. Casiano Amorrortu y Aurrecoechea y Sr. D. Ramón Real de Asúa y Arana. — *Interventor:* D. Julián Ortiz Martínez. — *Cajero:* Don Juan José Azcoitia Muesca. — *Secretario:* D. Angel Bosque Montañés.

BURGOS

Director: Sr. D. Dionisio Medina Baños. — *Consejeros:* Sr. D. Alberto Aparicio Vázquez y Sr. D. José Cuesta Cobo. — *Interventor:* Don José Kutz Boullit. — *Cajero:* D. Arsenio Simarro y García de la Santa. *Secretario:* D. Ignacio Rodríguez Escorial.

CABRA

Director: Sr. D. Eugenio Moreno Molina. — *Consejeros:* Excelentísimo Sr. D. Alonso de Heredia y del Rivero, Marqués de Escalona; Sr. D. Rafael Moreno La Hoz y Sr. D. José Pallarés Delsors. — *Interventor:* D. Mariano Lama y Méndez de San Julián. — *Cajero:* D. Manuel Cuervas Echevarría. — *Secretario:* D. Rafael García Albors.

CACERES

Director: Sr. D. Agapito González Rodríguez. — *Consejeros:* Señor D. Eloy Sánchez de la Rosa y Excmo. Sr. D. García Muñoz Torres Cabrera, Conde de Canilleros. — *Interventor:* D. Arturo Fernández Treilles. — *Cajero:* D. Germán de Luna Alsina. — *Secretario:* D. José Trullenque Aguiar.

CADIZ

Director: Sr. D. Andrés Marcén Hernández. — *Consejeros:* Señor D. Jesús Rodríguez y González Tánago, Sr. D. Alvaro Picardo Gómez, Sr. D. Juan Luis Martínez del Cerro y Picardo y Sr. D. Alfonso Palomino Blázquez. — *Interventor:* D. Luis Derqui Morilla. — *Cajero:* D. Manuel Luna López. — *Secretario:* D. José Tello de Meneses y Gianora.

CALATAYUD

Director: Sr. D. Luis Fabiani y de Francia. — *Consejeros:* Señor D. Antonio Bardají Zabalo y Sr. D. Arturo Mediano Sancho. — *Interventor:* D. Lisardo Mena y Ruiz del Portal. — *Cajero:* D. Luis Moya Gamundi. — *Secretario:* D. José Vicario Alonso.

CARTAGENA

Director: Sr. D. Inocencio Moreno Quiles. — *Consejeros:* Sr. Don Eduardo Espín Vázquez, Sr. D. Pedro Juan Serrat Andréu, Sr. D. Francisco Albaladejo Soler y Sr. D.
Interventor: D. José Luis Wagener Nogués. — *Cajero:* D. Alfonso Díaz y Marín de Espinosa. — *Secretario:* D. Vicente Chiralt Cendra.

CASTELLON

Director: Sr. D. Federico Salido Almarcha. — *Consejeros:* Señor D. Eugenio Roig Huguet y Sr. D. Severino Ramos Feltrer. — *Interventor:* D. — *Cajero:* D. José Sánchez Barcáiztegui y Caabeyro. — *Secretario:* D. Enrique Robert Martínez.

CIUDAD REAL

Director: Sr. D. Pascual Tello Zueco. — *Consejeros:* Sr. D. Bernardo Peñuela Fernández y Sr. D. Rafael Martínez Fernández. — *Interventor:* D. Adolfo Lucendo Vidal. — *Cajero:* D. Manuel García-Diego Barreira. — *Secretario:* D. Antonio Fleta Pola.

CORDOBA

Director: Sr. D. José Carbonell Trillo-Figueroa. — *Consejeros:* Señor D. Pedro López Alvear, Sr. D. Rafael Cruz Conde, Excmo. Sr. Don José Ramón de la Lastra y Hoces y Sr. D. Manuel Rodríguez de Templeque y Fernández Montes. — *Interventor:* D. Manuel Calderón Santillán. — *Cajero:* D. Juan de Santiago Carrión. — *Secretario:* D. Francisco Martín García.

CORUÑA

Director: Sr. D. Narciso de Abia y Arthaud. — *Consejeros:* Señor D. Enrique Fraga Rodríguez, Sr. D. Manuel Sáez Torres y Sr. D. Severino Lamas Calvelo. — *Interventor:* D. Ricardo Ramos Winthuyssen. *Cajero:* D. José María Frade Fernández. — *Secretario:* D. Gustavo Callejas de la Hera.

CUENCA

Director: Sr. D. Francisco Gonzálbez Climent. — *Consejeros:* Señor D. Jesús Marchante Sánchez y Sr. D. Venancio Gascueña García. — *Interventor:* D. Luis Vicente Herrero Rodríguez. — *Cajero:* D. Leonardo Lombera del Rivero. — *Secretario:* D. Alberto del Pozo y Moneo.

DON BENITO

Director: Sr. D. José Luis Salido Almarcha. — *Consejeros:* Señor D. Guillermo Nicoláu Cortijo y Sr. D. Manuel Santamaría Lozano. — *Interventor:* D. Modesto Cayetano Alonso Díaz. — *Cajero:* D. Emilio Álvarez Antón. — *Secretario:* D. Javier Rodríguez López.

EL FERROL DEL CAUDILLO

Director: Sr. D. Emilio Martín de Cáceres y Cruz. — *Consejeros:* Sr. D. Eduardo Ballester Peris y Sr. D. Rafael Romero Filgueira. — *Interventor:* D. Luis Lentijo Valverde. — *Cajero:* D. Julio Iribarren de las Alas Pumariño. — *Secretario:* D. Jesús García Rosales.

GERONA

Director: Sr. D. Godofredo Rivera Sanz. — *Consejeros:* Sr. D. José Ribot Olivas, Sr. D. Luis Sibils Ribas y Sr. D.
Interventor: D. Manuel Fernández Bobadilla Muñoz. — *Cajero:* Don Enrique Serrano Gil de Santivañes. — *Secretario:* D. José San Gil de Pedro.

GIJON

Director: Sr. D. Jacobo Abruñedo Abruñedo. — *Consejeros:* Señor D. Baldomero Alonso Gutiérrez, Sr. D. Alberto Paquet y García Rendueles, Sr. D. Amadeo Alvarez Builla y Sr. D. Angel Martínez de Azcoitia y Herrero. — *Interventor:* D. Pedro Fernández González. — *Cajero:* D. Francisco González Paredes. — *Secretario:* D. José Vela Galino.

GRANADA

Director: Sr. D. Antonio Valverde Arenas. — *Consejeros:* Señor D. Manuel Rodríguez Acosta y González de la Cámara, Sr. D. Pedro Moreno Agrela, Excmo. Sr. D. Emilio Dávila y Ponce de León, Conde de Guadiana, y Sr. D. Francisco Conde Teruel. — *Interventor:* D. Antonio Jiménez Butigieg. — *Cajero:* D. Vicente J. Cayuela Santesteban. — *Secretario:* D. Daniel Martínez Sauca.

GUADALAJARA

Director: Sr. D. Alberto Rivas García. — *Consejeros:* Sr. D. Manuel Canalejas Bricio, Sr. D. Mariano Buixaréu Juñent y Sr. D. Angel Díaz Clemente. — *Interventor:* D. Emilio de Andrés Orcajada. — *Cajero:* Don Carlos Bellido Morales. — *Secretario:* D. Enrique Sánchez Fernández.

H A R O

Director: Sr. D. Ramón Brox y Parra. — *Consejeros:* Sr. D. José García Medina y Sr. D. José Fernández Ollero. — *Interventor:* D. Juan Rubio Cano. — *Cajero:* D. Lisardo Gutiérrez García. — *Secretario:* Don Carlos Ortiz Velarde.

H U E L V A

Director: Sr. D. José Medina Ataz. — *Consejeros:* Sr. D. José Limón Caballero, Sr. D. Joaquín López Gómez y Sr. D. César Augusto García Limón. — *Interventor:* D. Nicolás Alcalá del Olmo y Pierret. — *Cajero:* D. Víctor Goñi López. — *Secretario:* D. José González Duque de Heredia.

H U E S C A

Director: Sr. D. Delfín Gállego Grassa. — *Consejeros:* Sr. D. Pedro Sopena Claver y Sr. D. Justo Pérez Arnal. — *Interventor:* D. Tomás Sánchez Lumbreras. — *Cajero:* D. Ricardo Lalaguna Rayón. — *Secretario:* D. José Atarés Ara.

J A E N

Director: Sr. D. Francisco Herizo Alvarez. — *Consejeros:* Sr. D. Manuel Suca Queiruga, Sr. D. Virgilio Anguita Sánchez y Sr. D. Mateo Ruiz Vilches. — *Interventor:* D. Jesús Fernández Polo. — *Cajero:* Don Carlos Paredes Marín. — *Secretario:* D. Enrique Briones Sasselly.

J A T I V A

Director: Sr. D. José Alfaro Juan. — *Consejeros:* Sr. D. José Romero Soldevila y Sr. D. Pedro Martínez Marín. — *Interventor:* D. Federico Lletget y Martínez de Azcoitia. — *Cajero:* D. Juan Pedro Villarroya Ventura. — *Secretario:* D. Gaspar Rodríguez Villar.

J E R E Z D E L A F R O N T E R A

Director: Ilmo. Sr. D. Manuel González de la Peña y Alonso Fernández. — *Consejeros:* Sr. D. Fernando C. Lassaletta y Terry, Ilustrí-

simo Sr. D. Luis López de Carrizosa e Ibarra, Conde de Peraleja, y Excelentísimo Sr. D. Pedro Domecq y Rivero, Marqués de Domecq d'Usquain. — *Interventor*: D. Manuel García Barroso. — *Cajero*: D. Vitalio Coloma García. — *Secretario*: D. Carlos Calafat Cardona.

L A S P A L M A S

Director: Sr. D. Enrique Dasca García. — *Consejeros*: Sr. D. Cristóbal Bravo de Laguna y Manrique de Lara, Sr. D. Matías Vega Guerra y Sr. D. Tomás Bosch-Millares. — *Interventor*: D. Saturnino Pellús Ormazábal. — *Cajero*: D. Jacinto Inglott Artiles. — *Secretario*: D. José Leopoldo Iglesias y Serrano.

L E O N

Director: Sr. D. Luis Jouve Aguado. — *Consejeros*: Sr. D. Segundo Guerrero Calzada, Sr. D. Francisco del Río Alonso y Sr. D. Lucio García Moliner. — *Interventor*: D. Juen Orbea Gorostiaga. — *Cajero*: Don Abelardo Martínez Ortiz. — *Secretario*: D. Segundo Ocampo Rueda.

L E R I D A

Director: Sr. D. José Curiá Melgosa. — *Consejeros*: Sr. D. Mariano Jaques Piñol, Sr. D. Manuel Florensa Farré y Sr. D.
Interventor: D. Andrés Roca Morey. — *Cajero*: D. Miguel Seguí Vidal. —
Secretario: D. Saturnino Montojo Fernández.

L I N A R E S

Director: Sr. D. José Castro Catalán. — *Consejeros*: Sr. D. Francisco Izquierdo López, Sr. D. Luis Carlos Yanguas Gómez y Sr. D. Antonio Fernández-Arroyo Caro. — *Interventor*: D. Angel Sanchez Fernández. — *Cajero*: D. Ricardo Hernández Gómez. — *Secretario*: D. Manuel Corral Marchante.

L O G R O Ñ O

Director: Sr. D. Luis Picatoste Desplán. — *Consejeros*: Sr. D. Jesús Briones y García Escudero, Sr. D. Fernando Trevijano Lardies y Sr. Don

..... — *Interventor*: D. Iluminado Moreno Cenice-
ros. — *Cajero*: D. Enrique Rabadán Salido. — *Secretario*: D. Pedro An-
tonio Estefanía Martínez.

LUGO

Director: Sr. D. José Antonio Martínez Ortiz. — *Consejeros*: Señor
D. Ramón Neira Pedrosa y Sr. D. Agustín Pita Varela. — *Interventor*:
D. Arcadio Monte Cuesta. — *Cajero*: D. Jesús Ortiz Martínez. — *Se-
cretario*: D. Juan Carreras-Presas Aguirre.

MALAGA

Director: Sr. D. Antonio González Portocarrero. — *Consejeros*: Se-
ñor D. José Álvarez Gómez, Sr. D. Luis Fernández de Villavicencio y
Crooke, Sr. D. Juan Peralta España y Sr. D. Pascual Taillefer Gil. — *In-
terventor*: D. Manuel Gallardo Gallegos. — *Cajero*: D. Carlos Cirugeda
Gayoso. — *Secretario*: D. Francisco Santos Gallán.

MELILLA

Director: Sr. D. Francisco Gómez de Travededo y Sánchez. — *Con-
sejeros*: Sr. D. Francisco Caballero López y Sr. D. Pedro Cabanillas
Chica. — *Interventor*: D. Juan Martínez Ortiz. — *Cajero*: D. Arturo
Rioja Manzanos. — *Secretario*: D. Fernando José María Arriaga y Arnal.

MURCIA

Director: Sr. D. Francisco Nabal Ibáñez. — *Consejeros*: Sr. D. Mi-
guel Caballero Sánchez, Sr. D. Francisco Flores Guillamón, Sr. Don
Joaquín Cerdá Vidal, Sr. D. Juan López-Ferrer Moreno y Sr. D. José
Muñoz Saura. — *Interventor*: D. José Escabias de Carvajal y Aguilar. —
Cajero: D. Eduardo Vall Amigó. — *Secretario*: D. Javier Herrero Malats.

ORENSE

Director: Sr. D. Gerardo Rodríguez Cardenal. — *Consejeros*: Señor
D. Luis Valencia y Cobián y Sr. D. Mario Fábrega Coello. — *Interven-*

tor: D. Sinforiano Melero Pereira. — *Cajero:* D. Vicente Hernández Berruezo. — *Secretario:* D. Ernesto Cebrián Velarde.

OVIEDO

Director: Sr. D. Vicente Botella Irles. — *Consejeros:* Sr. D. Luis Vereterra Polo, Excmo. Sr. D. José María Navia Osorio y Castropol, Marqués de Santa Cruz de Marcenado; Sr. D. Plácido Alvarez Builla y González Alegre y Sr. D. Eduardo Gómez Llera. — *Interventor:* Don Teófilo Modesto Martínez Suárez. — *Cajero:* D. Hilario Gil Castillo. — *Secretario:* D. Félix Gómez Villar.

PALENCIA

Director: Sr. D. José Luis García de la Torre y Sánchez de Lamedrid. — *Consejeros:* Sr. D. Luis Calderón Martínez de Azcoitia y señor D. Gaspar Arroyo Alonso. — *Interventor:* D. Agustín Alarcón Galán. *Cajero:* D. José Luis García Sánchez Blanco. — *Secretario:* D. Pascual de la Riva Silva.

PALMA DE MALLORCA

Director: Sr. D. Bartolomé Bestard Maura. — *Consejeros:* Sr. D. Bartolomé Maura Ribot, Sr. D. Miguel Roselló y Alemañy, Sr. D. Fausto Morell Gual y Sr. D. José Francisco Moragues Monlau. — *Interventor:* D. Pedro Cerezo Jiménez. — *Cajero:* D. Gabriel Gili Bataller. — *Secretario:* D. Mateo Llobera Bestard.

PAMPLONA

Director: Sr. D. José Fernández de la Hoz y García. — *Consejeros:* Sr. D. Javier Sagaseta de Ilurdoz y Santos, Sr. D. Miguel María Zozaya e Iturralde, Sr. D. Hilario Etayo Esparza y Sr. D. Primitivo Erviti y Ruiz de Escudero. — *Interventor:* D. Tomás Alonso Martín. — *Cajero:* D. Manuel Mañeru Roncal. — *Secretario:* D. Julio de Carlos de Val.

PONTEVEDRA

Director: Sr. D. Lorenzo Chico Herrero. — *Consejeros:* Sr. D. Pedro García Fernández y Sr. D. Remigio Hevia Marinas. — *Interventor:* Don Pedro Abad García. — *Cajero:* D. Luis Losada Calvo. — *Secretario:* Don Felipe Alvarez Gallego.

REUS

Director: Sr. D. Juan Juderías Cano. — *Consejeros:* Sr. D. Ramón Vilella Estivil y Sr. D. José María Llopis Borrás. — *Interventor:* Don Julio Rubio Cano. — *Cajero:* D. Antonio Brieua y del Pozo. — *Secretario:* D. Ramón Figueras Domínguez.

SALAMANCA

Director: Sr. D. Antonio Frade y Muñoz Caravaca. — *Consejeros:* Sr. D. Fernando García Sánchez y Sr. D. Gaspar Alba León. — *Interventor:* D. Mariano Gutiérrez Crespo. — *Cajero:* D. Enrique Bala Redecilla. — *Secretario:* D. José Manuel Goya Matute.

SAN SEBASTIAN

Director: Sr. D. Jesús Vinyas Ribelles. — *Consejeros:* Sr. D. Juan María Laffite y Obineta, Sr. D. Manuel Rezola Laparte y Sr. D. Fernando Fernández Sabater. — *Interventor:* D. Jesús Esquivias Urquiola. *Cajero:* D. José Luis de Encio y Marrón. — *Secretario:* D. Rafael Muñoz Sáenz.

SANTANDER

Director: Sr. D. Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Barbadillo. — *Consejeros:* Sr. D. Isidoro del Campo y Fernández Ontoria, Sr. D. Antonio Blanco Cid, Sr. D. Casimiro Tijero Noriega, Sr. D. Juan José Pérez del Molino y Herrera y Sr. D. — *Interventor:* D. José Ramón Carriles del Cueto. — *Cajero:* D. Jesús Ortiz Velarde. — *Secretario:* D. Ignacio Villar Dosal.

SANTIAGO

Director: Sr. D. Ramón Artigas Cía. — *Consejeros:* Sr. D. Julián Pérez Esteso, Sr. D. Ramón Sánchez Andrade y Sr. D. Juan Varela de Limia y García. — *Interventor:* D. Enrique Sánchez Martín. — *Cajero:* D. José Quesada Sánchez. — *Secretario:* D. Manuel Reino Martínez.

SEGOVIA

Director: Sr. D. Enrique de Abarca y Gallo Alcántara. — *Consejeros:* Sr. D. Tirso Rey González, Sr. D. Luis Cabanyes Vivanco y señor D. Pedro Moreno Herrero. — *Interventor:* D. Isidoro Duque Miguelláñez. — *Cajero:* D. José Luis Rodríguez Escorial. — *Secretario:* Don Aurelio Herrero Llorente.

SEVILLA

Director: Sr. D. Carlos Jiménez y de Laiglesia. — *Consejeros:* Señor D. Tomás de Ibarra y Lasso de la Vega, Sr. D. Joaquín Muñoz Casillas, Sr. D. Francisco Villagrán Abaurrea, Sr. D. Angel Camacho Baños y Sr. D. José Luis de Pablo Romero Artaloitia. — *Interventor:* D. José Manuel Derqui Morilla. — *Cajero:* D. Fernando Mateos Damiá. — *Secretario:* D. Juan Manuel García del Riego.

SORIA

Director: Sr. D. Pedro Sáez Larrinaga. — *Consejeros:* Sr. D. Eduardo Peña y Martínez y Sr. D. José María Fresneda Moreno. — *Interventor:* D. Pedro Sánchez Sánchez. — *Cajero:* D. Rafael Larrañaga y Oteiza. — *Secretario:* D. Saturnino Ridruejo y Ruiz Zorrilla.

TALAVERA DE LA REINA

Director: Sr. D. Ramón Guerendiaín Salaberri. — *Consejeros:* Señor D. Félix Moro Vallejo, Sr. D. Lucas Prieto Pérez y Sr. D. Virgilio R villa García Izquierdo. — *Interventor:* D. Anselmo Adiego Fernández. — *Cajero:* D. José Fernández Aguirre. — *Secretario:* D.

TARRAGONA

Director: Sr. D. Enrique Sierra Pastrana. — *Consejeros:* Excelentísimo Sr. D. Javier de Muller y de Ferré, Marqués de Muller; Sr. D. Santiago Gramunt Subiela, Sr. D. Antonio Rosell Fortuny y Sr. D. Luis Sedó Boronat. — *Interventor:* D. Manuel Aguilar-Tablada y Tejón. — *Cajero:* D. Antonio Muñoz Sánchez. — *Secretario:* D. Antonio Sobrado Villarías.

TENERIFE

Director: Sr. D. Leopoldo Cano Frades. — *Consejeros:* Sr. D. Luis Gabarda Sitjar y Sr. D. José Rodríguez Febles. — *Interventor:* D. José Sánchez-Malo Granados. — *Cajero:* D. Enrique Bárbara Martín. — *Secretario:* D. Pedro Alemany Sitjá.

TERUEL

Director: Sr. D. Abelardo Angel Atarés Ara. — *Consejeros:* Señor D. Joaquín Julián Gil y Sr. D. Francisco Ferrán Zapatero. — *Interventor:* D. Miguel Santos Gallán. — *Cajero:* D. Manuel Prats Galofre. *Secretario:* D. Domingo Pérez Marín y de Castro.

TOLEDO

Director: Sr. D. Juan Martínez y de Osma. — *Consejeros:* Señor D. Cirilo Calderón Pérez, Sr. D. Celso del Castillo Sánchez-Cabezudo y Sr. D. Fernando Aguirre Martínez Indo. — *Interventor:* D. Francisco Javier Sanchís Coscollá. — *Cajero:* D. Ramón Ascarza Pérez. — *Secretario:* D. Enrique Gilarranz Vallejo.

TORTOSA

Director: Sr. D. José Torralba Smolinski. — *Consejeros:* Sr. D. Secundino Sabaté Barjau y Sr. D. José F. Grego y Grego. — *Interventor:* D. Adolfo Alvarez y Pérez de Barradas. — *Cajero:* D. José María de Cruells y de Martí. — *Secretario:* D. José Paz Varela.

VALDEPEÑAS

Director: Sr. D. Joaquín Frade y Muñoz Caravaca. — *Consejeros:* Sr. D. Amador Caravantes del Fresno y Sr. D. Luis Madrid Sánchez-Trillo. — *Interventor:* D. Salvador Pujol y García Herraiz. — *Cajero:* D. Ramón Fernández de la Reguera y Presa. — *Secretario:* D. Joaquín Lillo Soler.

VALENCIA

Director: Sr. D. José Alacréu Marí. — *Consejeros:* Sr. D. Antonio Noguera Bonora, Sr. D. Santiago Miralles Hurtado, Sr. D. Desiderio Criado Cervera, Sr. D. Juan Antonio Gómez Trenor, Sr. D. Esteban Martínez Pérez y Sr. D. José Puchol Miquel. — *Interventor:* D. Andrés Velasco González. — *Cajero:* D. Eduardo Taulet Rodríguez. — *Secretario:* D. Julio Quesada García.

VALLADOLID

Director: Sr. D. Victoriano Sebastián Fernández. — *Consejeros:* Sr. D. Agustín Enciso Briñas, Sr. D. Millán Alonso Lasheras y Señor D. Eusebio Eloy Caro Rodríguez. — *Interventor:* D. Luis Puncel Bosch. *Cajero:* D. Tomás Arrieta Ramiro. — *Secretario:* D. Manuel Ripoll Alvarez.

VIGO

Director: Sr. D. Juan Boronat y Soto. — *Consejeros:* Sr. D. Guillermo de Oya Salgueiro, Sr. D. Moisés Alvarez O'Farril, Sr. D. Gaspar Massó y García y Sr. D. Fernando Conde de Ponte. — *Interventor:* D. Rafael Argüelles Blanco. — *Cajero:* D. Emilio López-Dóriga y de Vial. — *Secretario:* D. Manuel Fernández Hernández.

VITORIA

Director: Sr. D. Evaristo Larrazábal y Martínez de Ilarduya. — *Consejeros:* Sr. D. Eustaquio Buesa y Díaz de Eguidua, Sr. D. Juan Alonso Sánchez, Sr. D. Cayetano Ezquerro Ruiz y Sr. D. *Interventor:* D. Julio de la Vega Hazas. — *Cajero:* D. César Ufano Villarreal. — *Secretario:* D. Antonio Acedo Castañeda.

ZAMORA

Director: Sr. D. Rafael Caballero Vicario. — *Consejeros:* Sr. D. Joaquín Ramos Cadenas y Sr. D. Carmelo Cirión Escauriza. — *Interventor:* D. Antonio Alonso Mastache. — *Cajero:* D. Antonio Aguilar Ruiz. *Secretario:* D. Ramón Díez del Corral y Cerón.

ZARAGOZA

Director: Sr. D. Ricardo Muñoz Pérez. — *Consejeros:* Sr. D. Carmelo Serrano Salces, Excmo. Sr. D. Manuel Escoriaza y Fabro, Señor D. Felipe Sanz Beneded y Sr. D. Martín Artigas Gracia. — *Interventor:* D. Ricardo Sanz Barriopedro. — *Cajero:* D. Mariano Gorria Floria. — *Secretario:* D. Joaquín Arranz Monasterio.

AGENCIA DE LARACHE

Director: Sr. D. Pedro García Méndez. — *Interventor:* D. José Martínez Medrano. — *Cajero:* D. Ciriaco Trápaga Ranero.

AGENCIA DE TETUAN

Director: Sr. D. Luis Trujillano López. — *Interventor:* D. José Ruiz Martínez. — *Cajero:* D. Francisco Herranz Sanz.

AGENCIA DE PARIS

Director: Sr. D. Alfonso del Rivero y Aguirre. — *Interventor:* Don José Erviti y Ruiz de Escudero. — *Cajero:* D.

AGENCIA DE LONDRES

Director: Sr. D. Aurelio Valls y Belda. — *Interventor:* D.
..... — *Cajero:* D. Carlos Jauralde Hart.

REPRESENTACION DE TANGÈR

Representante: Sr. D. Emilio Sanz Barriopedro. — *Interventor:* Don Vicente Angel de la Brena Ortiz. — *Cajero:* D. Francisco Landa Blanco.

